



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”**

ESCUELA DE POSGRADO

**MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS
PENALES**

**“LA INCORPORACION DE LA REPARACION CIVIL EN LA
LIBERTAD DE EXPRESION VS EL EJERCICIO PERIODISTICO
SIN TITULO PROFESIONAL, EN EL DELITO DE DIFAMACION”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRA EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

AUTORA:

Bach. Colina Pérez de Figueroa Giuliana Patricia

ASESOR:

Dr. Arana Cortez Miguel Arcángel

**Lambayeque, septiembre
2022**

**“LA INCORPORACION DE LA REPARACION CIVIL EN LA
LIBERTAD DE EXPRESION VS EL EJERCICIO PERIODISTICO
SIN TITULO PROFESIONAL, EN EL DELITO DE DIFAMACION”**

Colina Pérez de Figueroa Giuliana Patricia
AUTORA

Arana Cortez Miguel Arcángel
ASESOR

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para optar el Grado Académico de: MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.

Aprobado por:




Dr. GILMER ALARCON REQUEJO
Presidente



Mg. JOSE HERNAN NECIOSUP CHANCAFE
Secretario



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
Vocal

 UNPRG UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	ESCUELA DE POSGRADO <i>Escuela de Posgrado</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	20-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACION	FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS	Pág. 1 de 3	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las 04.00 p.m. del lunes 30 de mayo de 2022, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°961-2021-EPG, de fecha 29 de octubre de 2021, conformado por:

Dr. GILMER ALARCON REQUEJO	Presidente
Mg. JOSE HERNAN NECIOSUP CHANCAFE	Secretario
Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO	Vocal
Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ	Asesor

Para evaluar el informe de tesis de la tesista GIULIANA PATRICIA COLINA PEREZ, candidata a optar el grado de MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES con la tesis titulada "LA INCORPORACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN LA LIBERTAD DE EXPRESION VS EL EJERCICIO PERIODISTICO SIN TITULO PROFESIONAL, EN EL DELITO DE DIFAMACION".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°534-2022-EPG de fecha 16 de mayo de 2022, que autoriza la Sustentación Virtual del informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó a la candidata a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por la candidata, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con **15 puntos**, equivalente a **REGULAR**, quedando la candidata apta para optar el Grado de MAESTRA EN DERECHO

Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

	ESCUELA DE POSGRADO Dr. Don Simón Rodríguez	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	29-8-2020
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL</u> <u>DE TESIS</u>	Pág. 2 de 3	

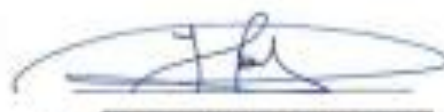
CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las 05.11 p.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. GILMER ALARCÓN REQUEJO
PRESIDENTE



Mg. JOSÉ HERNÁN NECIOSUP CHANCAFE
SECRETARIO



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
VOCAL



Dr. MIGUEL ARCÁNGEL ARANA CORTEZ
ASESOR

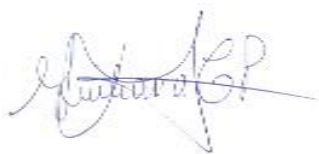


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Yo, Colina Pérez de Figueroa Giuliana Patricia, identificada con DNI N° 41851356, autora de la investigación, en forma libre y voluntaria declaro que los resultados obtenidos y presentados en mi informe final de tesis, previo a la obtención del grado académico de Maestra en Ciencias Penales, en EPG UNPRG son originales, auténticos y personales.

Siguiendo los principios de la investigación científica, la presente investigación, no constituye copia o plagio alguno; por lo que en la situación de que se demuestre lo contrario a lo descrito en el presente documento, me sometería a lo tipificado en nuestra legislación.

Chiclayo, abril del 2022



.....
COLINA PÉREZ DE FIGUEROA GIULIANA PATRICIA

DNI 41851356

Dedicatoria

A mi amada abuela OTILDIA ISABEL OBANDO SALDAÑA, quien desde el cielo es mi ángel protector, y a quien, antes de morir, le prometí cumplir con todas mis metas y objetivos.

A mis padres ERLITA Y JUAN, por ser la ayuda idónea, mi soporte y apoyo incondicional a ésta investigación.

A mis hijitos SEBASTIAN y JUAN DAVID, por ser mi mayor motivación, ya que todo mi esfuerzo está enfocado en ellos.

Agradecimiento

A Dios, por permitirme tener vida y salud para así llegar a concluir mis estudios y a la vez seguir avanzando para cumplir todo lo que me he propuesto.

A mi abuela OTILIA, mis padres ERLITA y JUAN, mis tíos JOEL y GRACIELA; quienes siempre me apoyaron en todo aspecto para poder culminar mis estudios con éxito y forjarme un futuro mejor; gracias a ellos he mantenido el impulso de nunca desmayar.

A mi asesor de tesis, por ser mi guía en esta investigación y a todos mis colegas quienes me apoyaron con la recolección de datos y entrevistas.

ÍNDICE GENERAL

Acta de sustentación	16
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD	18
Dedicatoria	19
Agradecimiento	20
Resumen.....	26
Abstract.....	27
INTRODUCCIÓN	28
CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO.....	36
SUB CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN	36
1.1. En el contexto internacional	36
1.2. En el contexto nacional.....	37
SUB CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS.....	38
1. Fundamentos filosóficos de la libertad de expresión	38
2. Fundamentos teóricos de la libertad de expresión	39
2.1. La teoría general de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental.	40
SUB CAPÍTULO III: BASE TEÓRICA	41
1. El Derecho a la libertad de expresión, definición.....	41
1.1. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión	41
1.2. El fundamento de la Libertad de Expresión en la democracia constitucional	43
1.3. Justificaciones de la Libertad de Expresión	43
1.4. Declaración sobre los desafíos claves para la Libertad de Expresión en la década 2011-2021.	44
1.5. El ciberespacio y su impacto en la Libertad de Expresión	46
1.6. El interés público y su relación con la libertad de expresión	46

1.7. El Derecho a Libertad de Información	47
2. Los Derechos Fundamentales	47
2.1. El concepto de una teoría jurídica general de los derechos fundamentales de la ley fundamental	47
2.2. Los derechos fundamentales de la Ley Fundamental.....	48
3. Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente N° 0027-2005-PI/TC sobre la colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es obligatoria.	49
4. CIDH y Periodismo sin colegiatura.....	50
SUB CAPITULO IV: LA REPARACIÓN CIVIL	52
1. La Reparación Civil: Definición	52
2. Responsabilidad civil	53
2.1 Naturaleza jurídica	53
2.2. Regulación.....	54
2.3. Funciones de la Responsabilidad Civil	55
a. Hecho ilícito penal	56
b. Hecho ilícito civil	57
2.4. Elementos comunes a todos los casos de responsabilidad	57
2.5. La reparación, instrumento autónomo en la prevención	59
2.6. Controversias de la reparación civil.....	61
2.7. Análisi del Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116	62
3. El delito de difamación. Definición	64
A. Descripción típica	64
B. Bien jurídico a proteger	64
3.1. Elementos del tipo penal objetivo de la difamación	65
3.2. Elementos del tipo penal subjetivo de la difamación.....	65
3.3. Tentativa y consumación.....	66

3.4. Autoría y participación.....	66
SUB CAPÍTULO V: DAÑO MORAL O EXTRA PATRIMONIAL	68
1. Daño moral. Definición.....	68
A. Daño emergente o indirecto	68
B. Lucro Cesante	69
1.1. Regulación	69
1.2 Criterios para establecer la Reparación.....	71
2. Jurisprudencia	72
2.1 La jurisprudencia nacional.....	72
3. Jurisprudencia Internacional	73
3.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pronunciamiento	73
SUBCAPÍTULO VI: DEFINICIÓN CONCEPTUAL, OPERACIONALIZACIÓN	75
1. Definición conceptual.....	75
A. Derecho a la Libertad de expresión	75
B. Derecho a la libertad de información	75
C. Derechos Fundamentales.....	75
D. Difamación	75
E. Responsabilidad Civil	76
F. Reparación civil	76
G. Daño moral	76
H. Lucro cesante	76
2.Operacionalización de variables	76
Variable independiente (V.I)	76
Variable Dependiente (V.D.)	77
3. Hipótesis.....	78
CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES.....	79

1. Tipo de investigación	79
1.1. Diseño de investigación.....	79
2. Método de investigación	80
3. Diseño de contrastación	81
4. Población, muestra y muestreo.....	81
4.1. Población	81
4.2. Muestra	81
5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	81
5.1. Técnicas de recolección de datos	81
5.2. Instrumentos de recolección de datos	83
6. Procesamiento y análisis de datos	84
CAPITULO III	85
RESULTADOS	85
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.....	86
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.....	87
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.....	75
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.....	76
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.....	78
3.2 Propuesta.....	88
132º DEL CÓDIGO PENAL SOBRE DIFAMACIÓN	88
I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	88
II PROPUESTA DE SOLUCIÓN Artículo 132º Difamación	90
III. ACTORES INVOLUCRADOS	91
IV. ALCANCES DE LA PROPUESTA.....	91
V. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL	91
VII. MARCO LEGAL	92

CAPITULO IV	93
DISCUSIÓN	93
B. En cuanto a los antecedentes de estudio	95
CONCLUSIONES.....	97
A. Con el objetivo general.....	97
B. Con los objetivos específicos	97
Recomendaciones.....	100
Referencias	101
ANEXOS	107
I. Sociodemográfico	108
II. Interrogantes temáticas.....	108
Panel fotográfico.....	111
Entrevistando.....	111

Resumen

La presente investigación tiene por objetivo proponer una iniciativa legislativa, modificatoria del artículo 132 del CPP (Código Penal Peruano) para penalizar el incumplimiento de la “Reparación Civil” a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación, pertenece al enfoque cuantitativo, del diseño no experimental, realizado de manera transeccional, aplicada y propositiva, la población de este estudio estuvo conformada por 12 individuos, se empleó el método exegético, dogmático y hermenéutica, se realizó el análisis documental, entrevistas y cuestionarios.

Como conclusiones se afirma que la iniciativa legislativa modificatoria del artículo 132° del Código Penal propuesta para penalizar el incumplimiento de la Reparación Civil, contempla la pena limitativa de derechos la misma la cual tiene ventajas señaladas por la doctrina. Se recomienda a los jueces que acepten y adopten la propuesta porque aumenta su potencial sinérgico y no tiene efectos estigmatizantes.

Palabras clave: Difamación, iniciativa legislativa, reparación civil, libertad de expresión, derechos fundamentales.

Abstract

The objective of this investigation was to propose a legislative initiative, modifying article 132 of the CPP (Peruvian Penal Code) to penalize non-compliance with the "Civil Reparation" to social communicators who practice journalism without professional title in the crime of defamation, belongs to To the quantitative approach, of the non-experimental design, carried out in a transectional, applied and purposeful way, the population of this study was made up of 12 individuals, the exegetical, dogmatic and hermeneutic method was used, the documentary analysis, interviews and questionnaires were carried out. As conclusions, it is affirmed that the legislative initiative amending article 132 of the Penal Code proposed to penalize non-compliance with Civil Reparation, contemplates the limit penalty of rights, which has advantages indicated by the doctrine. Judges are encouraged to accept and adopt the proposal because it increases its synergistic potential and has no stigmatizing effects.

Keywords: Defamation, legislative initiative, civil reparation, freedom of expression, fundamental rights.

INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos muchos estudios han resaltado el uso de la televisión y los medios sociales ahora masificados, millones de personas utilizan el internet, y diversas aplicaciones dentro de las tecnologías de la información, como instagram, wassapp, Facebook, tik tok, entre otros que han aparecido últimamente pues, son de uso común y por lo tanto genera interacción como la nueva forma de comunicación a nivel mundial, la cual no sería posible sin la red informática.

No obstante, también observamos que este espacio se utiliza para expresar opiniones que van más allá de la autonomía de poder expresarse, y lo peor, altamente criticable y en varias oportunidades con alta carga emocional se llega a expresar palabras subidas de tono, soeces, se cae en el insulto y en delitos como la difamación, contemplados en nuestro CPP artº 132.

En Argentina, EFE (2021), precisa que el presidente Fernández, iba a realizar acciones de legales contra Patricia Bullrich, quien, en época de pandemia, alarmó a la población mencionando que en el Gobierno habría corrupción en la adquisición de vacunas; es decir, el presidente quedó asombrado por las declaraciones de su opositora quien manifestó un supuesto soborno en la adquisición de vacunas, afirmación que realizó sin medir consecuencias, por lo que indicó tomar acciones legales.

En Bolivia, se ha considerado que es ideal la confrontación para evitar la desinformación y así mismo permitir que todos puedan expresar sus ideas a los medios de comunicación de manera libre.

Según Vivanco (2020), que refiere que debido a esta situación política en Bolivia se ha suscrito el decreto supremo D.S. 4,200 del 25-3-20, que busca sancionar a quienes publiquen, difundan información sin sustentación legal o sin medio probatorio; es decir, si la difusión de la información no tiene medio de prueba alguno quiere decir que iría más allá de la libertad que tiene el ser humano para poder expresarse, por lo que se podría considerar como información errónea que altere a la población.

Sin embargo, Vivanco analiza este decreto supremo y opina que el verdadero objetivo es silenciar las opiniones que van en contra a los intereses particulares del gobierno, por ello hay una violación constitucional del derecho a la libertad de expresión.

En Perú, actualmente se calcula que tiene al 28 % de la población en las redes sociales como usuarios de internet y de ellos, en el caso del “delito de difamación” incurridos por “youtubers” este medio virtual es el más usado para interactuar, incluso más para la publicación de noticias, opiniones u otras para compartir. La problemática muestra que la televisión y las redes sociales utilizadas afectan en demasía el honor y dignidad de las personas publicando diariamente noticias muchas veces falsas tipificadas como difamación, bullying, o similares; todo esto se logra a través del carácter permisivo, a veces anónimo de las redes sociales.

Existen muchos casos entre ellos emblemáticos como el de la señora Magaly Jesús Medina Vela quien, afrontó un proceso por el delito de difamación contra el jugador Paolo Guerrero, el caso fue mediático a Nivel nacional, se pudo observar que en la primera instancia se estableció una pena de cinco meses de prisión, en cuanto a la segunda instancia, esa pena aumentó a dos años; y en el caso de la reparación quedó con la suma aproximada de cien mil nuevos soles. Además, que se le exigió que cumpla la pena pecuniaria en conformidad de doscientos días multa; así mismo se le solicitó a la periodista como parte de su conducta, que sea rectificado públicamente lo dicho hacia el jugador, con el mismo método y el mismo número de veces que se transmitió dicha noticia difamatoria. El fallo, se cumplió con el ingreso al penal de mujeres de Chorrillos.

Así mismo la misma señora Magaly Medina afrontó proceso judicial iniciada por el querellante señor Jean Pierre Vismara, modelo masculino, culminando dicho proceso con prisión suspendida y el pago de la reparación civil, por dicho delito de difamación.

Otra querella por el mismo delito, que tiene la conductora Señora Magaly Medina, es en agravio de Nicola Emilio, Porcella Solimano, el Juez de la causa impuso una condena de un año de “pena privativa de libertad suspendida” por el

lapso de un año y una pena pecuniaria de ciento veinte días multa y el pago de veinticinco mil nuevos soles por reparación.

También se menciona el caso de Hugo Xavier Pilco, quien fuera querellado en 2 oportunidades, la primera por la aerolínea Latam y la segunda por el que fuera vicepresidente Sr Raúl Diez Canseco Terry durante el gobierno de Toledo. Cada uno de los demandantes pidió una sentencia de 3 años de pena, un millón de soles en indemnización civil. El Poder Judicial dictó pena de prisión condicional de un año por el delito de difamación contra la imputada con el fin de ya no perjudicar a Diez Canseco Terry, obligándola a pagar una multa de noventa días y una indemnización civil de diez mil soles y un año de pena suspendida.

De acuerdo a Polemos (2019), manifiesta que el uso de las redes interactivas o sociales, facebook y Twitter, son uno de los medios comunicativos donde muchas personas pueden cambiar información y opiniones de diversos temas.

Cabe rescatar que lo positivo de la tecnología digital y/o virtual y plataformas virtuales es que nos permite obtener información en tiempo real de manera rápida en cuestión de segundos y así la difusión de información se da en cuestión de segundo, por ello este medio de comunicación supera de manera abismal al medio televisivo, escrito o radial; mientras que lo negativo es que muchas personas aprovechan esta nueva forma de comunicación y confunden la libertad de expresión con la libertad para manchar el honor de las personas, por ello es que si no se tiene un cuidado y control del uso de las redes sociales se puede llegar a cometer delito de difamación y éste delito puede ir en aumento.

Respecto a las resoluciones dictadas, éstas no fueron con una detención o de alguna manera con cautela el fallo bajo el cumplimiento de normas comportamiento; por ello es que la continuidad de cometer el delito de difamación persiste y ahora con mayor frecuencia, pues la modernidad de las redes sociales permiten difundir información y ésta llegue a infinidad de personas de manera rápida sin importar distancias ni tiempos, por tal motivo es que se sugirió que estas plataformas o redes que forman parte del día a día de la sociedad, sean consideradas como un mecanismo de expansión comunicativa moderna.

Citando a la sentencia N° 00249-2010-PA/TC, se da una mejor calificación del delito, haciendo referencia a los tipos de expresiones que pueden ofender o denigrar, adquieren la calificación en la tipología del delito si afectan el honor del sujeto y si esto no es verás. En cuanto al aspecto criminal, si nos referimos a la destrucción total o parcial del honor de una persona, es cuando se cambia la versión de los hechos, agregando o quitando detalles de cierta situación que genera una idea errónea en cuanto a lo sucedido. Esto es totalmente opuesto a la idea de emitir una opinión veraz sobre un tema sociopolítico.

La información errónea que afecte a la persona es el comienzo para dar el primer paso al inicio del proceso penal, pues quien divulgue una información falsa que mancille el honor deberá ser procesado y la parte interesada o afectada deberá adjuntar medios de prueba que demuestren la consumación del delito de difamación. Por lo tanto, si la persona que divulgó la información demuestra que no se trata de una información errada sino veraz no se puede tipificar el delito.

Polemos (2019), menciona que ninguna persona tiene la facultad de afectar la dignidad de otra persona si tener pruebas que lo sustente.

Por ello el fallo del juez, no puede basarse solo en la ofensa para dictar sentencia y condenar a una persona como autor del delito, sino que esta ofensa deberá ser corroborada con medio de prueba objetivo que brinde consistencia y demuestre la consumación del delito.

Entonces, ¿Cómo se obtiene la prueba de dicha difamación?, la respuesta es sencilla, sólo basta el anuncio que difame a otro que puede ser a través de una publicación por cualquier medio social.

También se debe considerar que, a través de las plataformas virtuales, se da los casos de que se violentan, duplican o suplantando cuentas de diferentes personas con la finalidad de ocultar la verdadera identidad de quien mancilla el honor de una persona y éste no pueda ser sancionado por nuestra legislación.

Cabe recalcar que, si la información sobre los hechos no es verdadera y es difundida por las redes sociales y otro medio de comunicación, se vuelve parte de la tipificación en cuanto a los delitos que vaya en contra del honor de la persona.

Ante esto, cuando se refiere a otorgar un reparo civil, este tiene que estar a disposición de una comprobación de ciertos componentes para que exista la responsabilidad de indemnizar civilmente.

Por otro lado, algunos jueces penales dictan reparaciones civiles sin que estén sujetas dentro de las normas de conducta; por lo que éstas no son cumplidas.

Con lo mencionado anteriormente, se puede observar un problema, por la cual se formula de la siguiente manera:

¿De qué manera una iniciativa legislativa, modificatoria del artículo 132 del Código Penal, penaliza el incumplimiento de la Reparación Civil a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación?

El objetivo fue proponer una iniciativa legislativa, modificatoria del artículo 132 del Código Penal para penalizar el incumplimiento de la Reparación Civil a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación. Como objetivos específicos se formularon los siguientes:

Establecer los criterios de valoración que son utilizados en el preciso instante de aplicar la Reparación Civil en las resoluciones emitidas por los Juzgados Penales.

Analizar la fundamentación de las resoluciones judiciales que determinan la Reparación civil en las sentencias que han sido emitidas por los Juzgados Penales.

Elaborar una propuesta de *iniciativa legislativa, para modificar el artículo 132 de la legislación Penal, para sancionar* el incumplimiento de la Reparación Civil a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación.

El trabajo de investigación estudia el incumplimiento de la reparación civil, cuando se presenten aquellos delitos de difamación y tiene la justificación en base a los siguientes motivos:

Cuando nos referimos al derecho de la libertad que tiene la persona para poder expresarse, la doctrina confirma que este es un derecho inherente del ser humano, amparado Constitucionalmente. Por ello, según Robert Alexy (1993), refiere que lo justifica como parte de los derechos que fundamentan la vida del ser humano, siendo categorizada como parte del derecho positivo para poder establecer un orden plenamente jurídico.

La teoría dogmática de Derechos fundamentales según Robert Alexy (1993), sostiene que estos derechos son base para la existencia de un Estado, es por ello que se encuentran reconocidos en la primacía de la normatividad, que en este caso es la constitución. Y; en la cual se distinguen tres dimensiones, estas pueden relacionarse con ellas mismas jurídicamente. En cuanto a su análisis, empirismo y la normatividad.

Es razonable una justificación legal teniendo como base el derecho penal constitucional porque las garantías que brinda la constitución deben clasificarse de manera armónica y comprensiva según los principios que están constituidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos e instrumentos similares.

Cuando se define el poder de un Estado, se puede observar a través de la normativa y los fundamentos jurídicos.

Sobre el interés público en el razonamiento del legislador peruano para la despenalización, impulsada por la CIDH en los delitos contra el honor, no han recibido la suficiente atención; tan es así que los proyectos legislativos presentados sobre éste tema no fueron concretados ni suficientes para ser atendidos y/o aprobados, lo que nos demuestra el alejamiento a la tendencia de despenalización.

Según Alarcón (2020), sostiene que los proyectos legislativos no tuvieron apoyo ni fueron de interés público para obtener un criterio para lograr la despenalización.

Cabe recalcar que la Corte Suprema de nuestro país estableció como precedente vinculante el Acuerdo Plenario N° 3-2006/CJ-116 en los párrafos 8 y 13; en el que nos detalla que el honor y la libertad de expresión tiene igualdad en rango constitucional; por ello, se debe tener en consideración la circunstancia

en el que se da cada caso en delitos contra el honor, como se torna el interés público de las frases en cuestión y que estas sean ofensivas, ultrajantes, sin fundamento y realizadas de mala fe.

Arroyo (1979, citado en Guerrero,2017), refiere que el legislador y el juzgador deben estar enlazados por los principios y fundamentación; pues de esta manera el jurista estará vinculado con la norma, como intermediario en la parte legislativa y judicial.

La constitución y la Ley penal, deben ser de utilidad para la aplicación de los casos necesarios, el autor especifica que los principios que rigen el sistema penal no solo se orientan en la facultad que tiene el Estado para sancionar, sino también deben actuar como principios que permiten constituir el derecho, que sean para sancionar; por eso es que el denominado Derecho Penal debe considerarse también como Derecho Penal Constitucional, dentro del Estado peruano

Socialmente se justifica, puesto que, cuando el sujeto activo comete una infracción penal o delictiva, no está causando un agravio particularmente a la víctima (sujeto pasivo), sino que, a la vez está generando un perjuicio a la paz y seguridad de los ciudadanos. Entonces, es necesario poder determinar si a través del poder judicial, la reparación civil está siendo proporcional según el agravio que se ha cometido, buscando seguridad en el bien jurídico a proteger. En este aspecto también se justifica en el principio de proporcionalidad.

Con respecto a la primera idea, Roxin (2000), hace referencia que el deber del Estado no trata sólo de castigar al delincuente sino evitar que este vuelva a incidir en el mismo accionar y a la vez crear el conocimiento jurídico a la comunidad.

También menciona el objetivo del Derecho penal es evitar que se sigan cometiendo más delitos y de esta forma prevenir este tipo de situaciones que afecten a las personas y generen el menoscabo de la ley.

Entre otras limitaciones para realizar el estudio se mencionan:
Escasa jurisprudencia que se ha podido recopilar a nivel internacional, así mismo a nivel nacional y también local, con respecto objeto de estudio.

La pandemia COVID-19 como serio factor limitante en las relaciones presenciales con los operadores del derecho y colaboradores para indagar sobre materiales de estudio.

Bibliotecas cerradas por la creciente pandemia lo que dificulta el acceso a bibliografía especializada.

Escasa bibliografía en forma digital sobre la reparación civil a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación.

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO

SUB CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

1.1. En el contexto internacional

Viollier (2019), se refiere a la libertad de poder expresarse, en Chile; indicando que no hay concordancia con los tipos penales que hay en este país, por lo que, se han tenido que utilizar las estrategias legales para crear instituciones eficientes para resguardar la integridad de los individuos, teniendo en consideración a los personajes públicos y la manera de poder manifestar sus opiniones por medio de diferentes emisoras y así transmitir el mensaje a los demás y mantenerlos informados.

Para Coronado (2015), según la referencia citada, precisa que los parámetros que se puedan dar para evitar o prevenir los delitos no deben de tornarse muy marcada por parte del gobierno respecto en la libertad de poder expresarse en el mundo no físico como lo es el ciberespacio.

Claramente se puede denotar, la falta de precisión en cuanto a las conductas que pueden considerarse delitos informáticos, asegura el autor. Debido a la carencia de sentencias o jurisprudencia por parte de los operadores del derecho, en aquellos años sobre este nuevo delito. Recalcando también que el Estado no puede ser obstructor de lo que el ciudadano quiera expresar a través de una plataforma virtual una opinión o crítica sobre otra persona, por lo que, asegura que se requiere por parte de los legisladores puntualizar la penalidad cuando ocurra el hecho delictivo, sin que afecte la libertad de expresión, siendo así que se debe emplear otros métodos y medios para que no afecten a los cibernautas, así podremos dejar que se puedan expresar sin que se le pueda lesionar o vulnerar su derecho de dar a conocer lo que desee transmitir.

El mundo no físico o ciberespacio es muy interesante y amplio para la ciencia jurídica, generando el constante dinamismo, porque la información que pueden percibir las personas sin importar la distancia y a una velocidad mayor, es tal que en cuestión de segundos las personas pueden expresarse a través de una publicación, emociones, sentimientos, noticias falsas, reales. Llegando esta información a cualquier persona sin importar su lugar de origen, situación

socioeconómica. En estas plataformas todas las opiniones son leídas o escuchadas, pero, los operadores del derecho prevén una posible impunidad, ya que no hay principios que regulen estos medios, demostrando que las tecnologías de la información están rebasando el límite de soberanía nacional y de territorio.

1.2. En el contexto nacional

Venero (2020), llegó a la conclusión de que las normas penales compatibles con la norma constitucional del derecho tienden a asegurar una mínima interferencia en las libertades humanas. Por lo tanto, el derecho penal solo debe proteger los intereses legales y morales para que se mantenga el régimen del Estado. Por lo que, será posible excluir del delito aquellos actos que no sean susceptibles de causar una violación de los derechos legales.

El querer excluir la responsabilidad del comunicador social bajo el fundamento mencionado anteriormente que es el derecho a la libertad de poder expresarse o brindar información, sería la excusa perfecta para evitar la sanción en el delito contra el honor (difamación) y su reparación civil.

Según Achauanco (2018), concluye que la reparación civil es muy baja o mínima para todo el daño que se causa y también que en muchos casos la pena es suspendida y solo en pocos casos efectiva; es decir nuestro ordenamiento jurídico no tiene un buen discernimiento para fijar la reparación civil y sus cuantías; es decir, no puede determinarse en ejercicio a que si dicha pena es más inflexible o tal vez no lo sea.

Cabe precisar que Lozano (2018), concluye que la víctima fue empañada en su honor, por lo que debe recibir una indemnización civil para tratar de restaurar su condición antes de la consumación del delito de violación, por lo tanto, el abogado de la víctima es quien deberá exigir una indemnización por daños no monetarios, en mérito a las pruebas mentales y psicológicas; pero, lamentablemente, en casi la mayoría de los casos, los jueces ordenan una indemnización civil o indemnización muy baja.

SUB CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS

Todo trabajo que se aprecie de ser importante en distintos ámbitos de la vida académica, intelectual, social en las que se desenvuelve y desarrolla el hombre debe estar basado y sustentado en virtud de diferentes fundamentos:

1. Fundamentos filosóficos de la libertad de expresión

La libertad de pensamiento es el ideal donde descansan todos los derechos. Libre es lo propio producto de la actividad diferente a lo recibido mediante el dogma, costumbres o tradición. La libertad de pensamiento y expresión no especulativa, antes de expresar una categoría mental, una declaración contraria a la tiranía, escuela, iglesia, tradición y el Estado ejerce sobre las conciencias. Un Estado orientado por este ideal permitirá a sus ciudadanos crecer, llegar al éxito, a ser y actuar como seres racionales que indubitativamente lo son.

Filosóficamente, la razón humana como máxima expresión se ubica sobre el poder estatal puesto que no la puede eliminar ni limitar. Es el límite insuperable para toda fuerza externa: la dignidad del hombre que no puede ser utilizado por ningún otro, únicamente como medio, sino como fin.

Kant (1804) citado en Gonzáles (2012), sostiene que la autonomía es fundamental para la libertad, y ésta dentro del marco de la autorregulación moral. Considera que las reglas que rigen la moralidad son brindadas por el exterior afirmando que es lo que el individuo debe o no hacer.

Sus ideas apuntan a una moral laica, desafía a que el individuo sea reflexivo, que tenga ese coraje de liberarse de las limitaciones y del norte como razón, afirmando que las causas externas no afectan la racionalidad humana, así como la necesidad natural de sus acciones, mientras que la razón y el conocimiento, inalterados, son ejercitados por su voluntad efectiva.

Kant es un liberal que se dedica a la libertad negativa, que se entiende como la incapacidad de alguien para evitar que alguien haga lo que quiere, porque nadie obliga a esa persona a hacer lo que no quiere, es decir, cuanto más libre es mejor. Hay un gran espacio en el que puedes decidir qué hacer y

conseguir, puedes hacer lo que quieras sin que nadie te estorbe, en fin, con menos poder: más libertad, nadie que imponga decisiones o que ponga límites. En otro nivel, Kant se presenta como un libertario activo, lo que tiene que ver con la idea de que uno es libre porque es soberano; uno es libre en la medida en que el otro es autónomo; y eres libre porque impones tus propias reglas, tus límites.

Moro (citado en Gonzáles 2012), cree que la libertad implica el derecho de poder expresar las ideas, a través de la capacidad de recopilar información y elegir lo que uno quiere. De esta forma, la libertad implica la edificación de pensamientos, pero esta relación no implica que el hombre pueda expresar ilimitadamente el odio, el desprecio o el ridículo que considere, ya que esto redundará en el uso de la libertad de la expresión verbal o física. Se vuelven repulsivas y contrarias a una expresión armoniosa de la libertad del otro. La expresión de ideas debe ser clara y con respeto. No se debe Imponer actos contrarios a la voluntad pues desembocarían en el actuar que a cualquier persona antidemocrática le gustaría.

2. Fundamentos teóricos de la libertad de expresión

La constitución y la legislación internacional reconocen éste derecho sin precisar el alcance de su contenido ni a limitado su ejercicio, lo que genera, un gran trabajo para el ejecutante constitucional.

Cuando se reconoce como uno de los derechos fundamentales a la libertad de expresión da la implicancia por parte del Estado de diferente país, tiene como obligación, dos cosas: el deber de que se respete y a la vez, se garantice este derecho. Según el primero, los Estados están impedidos de realizar acciones que vayan en contra de la libertad de expresión, mientras que, segundo, los Estados deben tomar todas las medidas que permitan a todos disfrutarlos y ejercerlos, así como la prevención, investigación, sanción y subsanar todos estos actos afectar dicha libertad. En general esta obligatoriedad surge de la normativa internacional, que protege los derechos humanos y la Constitución.

Cabe recalcar que los estados a nivel mundial, tienen la obligación de contemplar sus ordenamientos legales, observando que sean efectos y fáciles de proteger. En el caso peruano, el proceso ideal para este caso que es el amparo, se encuentra tipificado en el art 200 inciso 2 de la Constitución, también estipulado ampliamente en el Código Procesal C, constituyendo una herramienta jurídica revisada internamente para la protección de este derecho, pero la utilidad con este fin, pocos son los ejemplos.

2.1. La teoría general de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental.

En palabras de Robert Alexy, (1993) considera que la dificultad en absolutamente todos los derechos que fundamentan la normatividad son cuando se involucre a la libertad estudiada.

SUB CAPÍTULO III: BASE TEÓRICA

1. El Derecho a la libertad de expresión, definición

Etimológicamente, el término libertad tiene su origen latín *libertasliberatis*, según la RAE (2005), que es la libertad que tiene el ser humano de realizar acciones o no hacerlas, siendo responsable de ello.

Siendo consagrado este derecho como se mencionó anteriormente en la Constitución, en el Perú, según su artículo 2, en sus párrafos, puede demostrar estipulando que la libertad de expresión es parte de la dignidad humana (subjetiva) y por supuesto un requisito indispensable que produce el efecto de un estado democrático (objetivo). (Informe del mediador No: 8, pág. 9).

Cabe recordar que la plena acción de este derecho, ya sea por parte de la prensa e información que pueda brindarse, es necesaria la responsabilidad social por la misma democracia, porque permite a las personas proteger en gran medida los derechos de todos nosotros. Más aún, permite que todos los ciudadanos tomen decisiones sobre la base de la mayor cantidad de información posible, solo así los ciudadanos pueden participar activamente en la vida pública.

La UNESCO ha hecho su mención ante este tema, permitiendo la mejora del ejercicio de la libertad de poder expresarse y a la vez proteger el derecho que corresponde a todas las personas a través de sus estatutos propuestos que se observarán en la continuación de la presente investigación.

1.1. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

El **principio 1**, indica que la libertad de expresión, es un derecho principal, individual, intransferible en todas sus estructuras, propio, connatural de todas las personas. Es, además es imprescindible en un pueblo democrático.

El **principio 2**, indica que toda persona tiene derecho a indagar, acoger y esparcir libremente información y opiniones por cualquier medio de comunicación, y por lo tanto no se le puede discriminar por ningún motivo.

El **principio 3**, indica que todos tienen derecho al acceso de información online o física de manera rápida y no onerosa y si es el caso, renovarla, corregirla y claro está si desea modificarla.

El **principio 4**, indica que el tener acceso a los archivos del Estado es un derecho primordial de la persona y de no poder hacerlo sería una amenaza poniendo en riesgo la seguridad de todo un estado con sus contribuyentes.

El **principio 5**, indica las restricciones para no divulgar ciertos datos que pueda afectar al honor de la persona o entidad, prohíbe la arbitrariedad y la libre fluidez de información que vaya más allá de la libertad de expresión.

El **principio 6**, precisa que todo individuo puede expresar su opinión a través de cualquier medio o plataforma que desee. Si se trata del periodismo debe tener conducta ética y no debe tener coerción del Estado.

El **principio 7**, indica que la veracidad, puntualidad u objetividad por parte de las naciones o estados, tiene que estar en armonía a los derechos que ya han sido reconocidos en el transcurso del tiempo internacionalmente.

El **principio 8**, indica que las personas se comunican y las redes sociales se reservan el derecho de reservar sus recursos, notas e información personal y expedientes profesionales.

El **principio 9**, indica que intimidar física o virtualmente a otra persona va en contra de los derechos del ser humano. El Estado castigará al delincuente y proporcionar restauración del patrimonio de la víctima.

El **principio 10**, indica que no se debe limitar a la prensa si existe algo de interés nacional, pero sin que el comunicador perjudique difundiendo una noticia falsa.

El principio 11, indica que los servidores públicos, por su misma función siempre están a vista de todos los ciudadanos, por ello se castiga a las expresiones ofensivas dirigida a ellos.

El principio 12, indica que los monopolios de los medios que sirven para comunicarse, están sujetos a la ley antimonopolio porque va en contra la real democracia.

También indica que, garantiza el ejercicio del derecho al acceso a la información a la ciudadanía, y no solo para los periodistas.

El principio 13, describe que la frecuencia radial, televisiva u online cuando atenta la libertad del individuo para manifestar sus ideologías, los medios pueden informar a la sociedad, pero teniendo en cuenta los principios mencionados anteriormente.

No existe compatibilidad a la libertad de expresión cuando se pretenda silenciar el trabajo de los investigadores que informan a la sociedad.

1.2. El fundamento de la Libertad de Expresión en la democracia constitucional

Bobbio (1997), manifiesta que la libertad de expresión se debería proteger, pues no se trata de un problema filosófico sino de un tema político y justificarlo en América latina, en especial en el Perú de hoy, parece ser válido sin que vaya en detrimento de su real aplicación.

1.3. Justificaciones de la Libertad de Expresión

Según (Barendt 2007) citado en (Carbonel 2011), manifiesta que las justificaciones de la libertad de expresión son:

- a. La razón en el descubrimiento de la verdad

(Corderch,1990) citado en (Carbonel.2011), indica que la verdad es lo que se debe valorar de manera positiva y para ello es necesario poder debatir todos los

componentes destacados, permitiendo que el individuo se exprese sobre un determinado tema, estos razonamientos se aplican en los procesos judiciales donde se pretende llegar a la verdad legal, por ello el magistrado debe escuchar atentamente a las partes y a los que forman parte del proceso que puedan proporcionar medios para convencer al magistrado en un caso concreto.

b. La razón de la autorrealización

Refiere Carbonell (2011), refiere que la libertad de expresión nos permite crecer de manera intelectual y moral, forjando nuestra propia personalidad y madurez con una vida feliz y plena, por ello, este derecho se debe defender de manera preferencial ante otros derechos, pero sin olvidar que no puede ser dañina para los demás.

c. La razón de la participación democrática

Carbonell (2011), precisa que la razón de la participación democrática permitirá discutir las mejores alternativas con una polémica notoria que sea franca, veraz y libre en el que se puedan dar críticas contra malos funcionarios con todos los habitantes adultos del país que podrán expresar sus razones y demostrar su falsedad o impertinencia para luego proponer mejoras, así los habitantes podrán evaluar las propuestas y emitir su confianza y respaldo a través del sufragio, contribuyendo así en el desarrollo democrático.

Vale recordar que existen posturas sobre la despenalización en los temas del honor y libertad de expresión, proyectos de ley que tuvieron poco apoyo del interés público para la lograr lo que ansiaban y anhelaban en la proporcionalidad en los delitos contra el honor y la libertad de expresión.

1.4. Declaración sobre los desafíos claves para la Libertad de Expresión en la década 2011-2021.

Según CIDH, (2010), indica que por motivo de principal interés relacionado con el objeto de estudio se aborda el desafío N° 2, - Difamación penal - que a la letra establece:

Una de las amenazas es el derecho penal porque sanciona este delito penalizándolo, incluyendo a la calumnia y claro está la difamación. Aunque el contenido difamatorio se ha eliminado en docenas de países, estas reglas aún se aplican en otros países. Si bien todas las leyes que penalizan la difamación son cuestionables, las características clave de estas leyes que nos interesan son las siguientes:

- a. Por lo general, estas reglas no requieren que las personas que mencionan este delito demuestren componentes clave para esta ilegalidad, como la falta de veracidad en dichas aseveraciones y la mala conducta intencional.
- b. Son leyes que también penalizan las declaraciones relativas a hechos ciertos, publicando solo informes exactos sobre declaraciones realizadas por organismos oficiales, o simplemente expresando opiniones.
- c. Ciertas normativas están protegiendo la imagen de las autoridades públicas, los símbolos nacionales o el propio estado.
- d. Estos regímenes legales no requieren que las figuras públicas y los funcionarios muestren un mayor nivel de tolerancia a las críticas de lo que la gente común esperaría.
- e. También, estas normativas aseguran la libertad para creer en lo que uno considera real, así mismo a las escuelas filosóficas, donde se tienen ideologías según el estilo de vida de cada individuo.
- f. La difamación colectiva, conocida también como la cultura de odio, ha sido considerada para castigar legalmente a quienes lo apliquen.
- g. Existen penas muy fuertes, como la cárcel, libertad suspendida, ausencia de derechos cotidianos que caracterizan a un civil y si tiene como profesión el periodismo, puede perder la libertad para seguir ejerciendo esta carrera, perjudicando el proyecto de vida de las personas.

1.5. El ciberespacio y su impacto en la Libertad de Expresión

Citando a la RAE (2006), precisa el mundo del ciberespacio como algo artificial que nos permite estar conectados con muchas personas e interactuar con ellas sin importar el tiempo y distancia; pues rompe patrones de interacción entre comunicadores y público y también vence barreras; sin embargo, su mal uso o ejercicio pueden ser contrarias a la legislación tipificada en un ordenamiento jurídico determinado, pues se podría abusar del uso de la libertad para poder expresarse, sin tener en cuenta las normas tuteladas por el orden jurídico.

1.6. El interés público y su relación con la libertad de expresión

La jurisprudencia norteamericana y alemana influyó en casos resueltos por la Corte IDH sobre libertad de expresión. Destacan los casos Herrera vs Costa Rica, Kimel vs Argentina y Olmedo Bustos vs Chile, en éstos el elemento principal para determinar la legitimidad del discurso es precisar si su contenido es de interés público.

En el caso peruano se observa la aplicación del interés público, como criterio para resolver disputas entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, presentando diferencias entre la sede constitucional y la ordinaria.

Según Alarcón (2000) sostiene que, dada la frecuencia de los fallos del Tribunal Constitucional del Perú y de la Corte IDH se limitó el tratamiento del referido criterio a la diferenciación entre la esfera pública y privada de las personas; es decir, dicho de otra manera, se limitó a la dimensión subjetiva, dejando de lado la dimensión institucional. No obstante, fue un gran logro en la resolución de conflictos entre el honor y el derecho a la libertad de expresión en la judicatura peruana.

1.7. El Derecho a Libertad de Información

La jurisdicción peruana, contempla el derecho de libertad de información, de la misma que se desprende que todo individuo puede transmitir o comunicar información cierta y confiable por cualquier medio; siendo que quien recibe la información la pueda recepcionar sin sentirse lesionado o dañado.

Núñez Martínez (2008), menciona que este derecho nos permite estar informados sin que el gobierno pueda maniobrar la información que los habitantes deben saber, y la vez permite transmitir una información objetiva a la opinión pública.

2. Los Derechos Fundamentales

Derechos fundamentales son los que se encuentran inherentes al ser humano y están regulados por nuestra Constitución.

Según Schmitt, este tipo de base es parte de un Estado libre jurídicamente donde se aprecia únicamente los "derechos individuales de libertad" Schmitt (1973 citado en Robert Alexy, 1993, p.63).

2.1. El concepto de una teoría jurídica general de los derechos fundamentales de la ley fundamental

Según Robert Alexy, (1993), se pueden formular diversas teorías en cuanto a los derechos fundamentales. En primer lugar, están las teorías que han formado parte de la historia, donde se da el argumento de cómo surgió este derecho, en segundo lugar, la teoría filosófica que da el fundamento y la tercera, la teoría social, donde se estudian estos derechos aplicados en la sociedad.

Todas las disciplinas de las ciencias sociales, están condicionadas a hacer un aporte en la problemática que pueda haber en los derechos fundamentales desde su visualización hasta métodos alternativos de solución. Tratándose en este caso de una teoría legal general y sus derechos que son fundamentales para el individuo. Recordando que tiene como objetivo los tres tipos de teorías mencionados líneas atrás.

2.2. Los derechos fundamentales de la Ley Fundamental

Para contribuir en este subtítulo, se nombrar nuevamente teorías, que ven por los derechos que son fundamentales y prácticamente válidas. Siendo diferente a las teorías antiguas, genéricas y otras fundamentales que no pertenecen a la Ley fundamental.

Según Robert Alexy (1993), indica las diferencias entre las teorías, no quiere decir que no se conecten unas con otras. Las teorías que son históricojurídicas, así como la teoría del derecho que es fundamental, por lo que se compara con los hechos registrados en la historia, ya que en la Ley fundamental apoya para su debida interpretación legal. Tal es así que, cuando se haya la unión con estas teorías teórico-jurídicas, da como resultado los hechos y de qué se ha tratado, qué tipo de estructura se utilizó y sus respectivas teorías generalizadas que son de relevancia para los derechos fundamentales.

Para que los derechos que estamos estudiando sean vigentes y permanezcan en el tiempo, tienen que tener la estructura adecuada para su debida contribución, claro está realizándose el debido análisis respecto a la materia que lo conforma. No olvidando que para entender estas teorías también se debe aprender a diferenciarlas.

Robert Alexy (1993), subraya que se debe conocer los métodos numéricos reales tendrá que asumir una amplia y multifacética noción del bien y validez. Para él, el aspecto empírico no se trata de una mera descripción del poder legislativo, se incluye descriptivamente y posibles predicciones de la actividad legal, es decir, la descripción de la ley judicial, así como la ley legislativa. Por otra parte, la validez de la ley está sujeta a los aspectos empíricos, siempre y cuando se trata de una condición de los efectos positivos de la justicia y la legislación. Por lo tanto, el tema del aspecto empírico no se limita al concepto de la ley o el valor del positivismo jurídico.

Los motivos en los que se encuentra la base de estos derechos inherentes, fundamentales, están sobre estimadas fácilmente debido a la ambigüedad de sus normas, no importa que apoya el concepto libertario de validez legal, con poco conocimiento de la ley. La ley, como cuando un

magistrado de materia constitucional toma su decisión, no pueden desistir al entendimiento y escrutinio legal de la Corte Constitucional Federal. Aquí, la cuestión de cómo construir en cada caso puede ser despedido desde la observación de la teoría válida y también las fuentes legales. Cabe mencionar que existen diversas conceptualizaciones en el aspecto jurídico de valor positivo que no puede ser ignorada por cualquier persona que quiera satisfacer las demandas de una profesión legal.

Cualquier persona que desea construir una declaración legal válida sobre la base de estos hechos debe interpretar a la luz de los supuestos que estos hechos son la fuente de la ley. Pero lo que queremos saber es que en la dimensión empírica de los datos siempre tienen un significado estrictamente empírico

En la historia de la teoría de la jurisprudencia, en muchos casos la importancia del impacto depende en gran medida de cómo se define la relación para obtener la precisión de esa relación. Por lo tanto, se necesitan estándares más altos, como la naturaleza del derecho como área de práctica.

3. Análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente N° 0027-2005-PI/TC sobre la colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es obligatoria.

El Expediente N° 0027-2005-PI/TC, sostiene que el derecho a la Libertad de Expresión es el derecho de todas las personas para manifestar sus ideas, opiniones, pensamientos o juicios sin restricciones; ya sea de forma oral o escrita. Su naturaleza es subjetiva y por ello puede someterse a un test de veracidad.

También sostiene que el derecho a la Libertad de Información es el derecho de todas las personas a comunicar relatos o hechos noticiables por cualquier medio de difusión de manera libre, esta información debe ser veraz; ya que de ella se desprende deberes y responsabilidades. Su naturaleza es objetiva.

Según la Convención Americana de Derecho Humanos, precisa que la Libertad de Información se debe dar con el respeto a los derechos y reputación

de los demás; pues de no ser así se sancionará la afectación conforme lo normado en nuestra legislación Penal, siendo que es la manera de reconocer el límite externo en la vida privada.

El Tribunal Constitucional declaró INFUNDADA la demanda; ya que nuestra legislación garantiza el pleno ejercicio de ambos derechos ya sea en el ámbito de una profesión o en cualquier caso particular; por ello la colegiación obligatoria de los periodistas no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos; es decir todo esto impediría el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y así limite a quienes deseen ejercerlo aun teniendo otras carreras profesionales, violando de esta manera el derecho que tiene toda persona para buscar y difundir informaciones o ideas por cualquier medio de comunicación.

Cabe detallar también que la no obligatoriedad de la colegiación para el caso de los periodistas no exime de responsabilidades, puesto que acarrea responsabilidad Penal y eventualmente responsabilidad civil.

4. CIDH y Periodismo sin colegiatura

Según Álvarez (2017), afirma que el ejercicio de la libertad de expresión corresponde a todas las personas y no se reduce a un sector de la sociedad; sin embargo, ese ejercicio reviste características especiales, que la Corte ha reconocido cuando viene al caso la expresión por parte de personas que se dedican profesionalmente a la comunicación de noticias, comentarios, opiniones, etcétera.

La Convención Americana garantiza este derecho a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, por lo que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo de personas.

Mediante opinión consultiva, la corte CIDH estudió la compatibilidad entre el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, en los términos de la

Convención Americana, y un ordenamiento interno que pudiera disponer la colegiatura para el desempeño profesional. Cuando se trata del ejercicio del periodismo la restricción profesional genera un límite a la libertad de expresión que no resulta compatible con la Convención Americana; en efecto, pone esa libertad en manos de un grupo reducido de personas, con exclusión de cualesquiera otras.

Por ello la Sentencia del Tribunal Constitucional - Expediente N° 00272005-PI/TC resultó INFUNDADA.

SUB CAPITULO IV: LA REPARACIÓN CIVIL

1. La Reparación Civil: Definición

Peña (2010), estipula que las sanciones tienen por objetivo, en primer lugar, restablecer la paz social y, en segundo lugar, brindar la indemnización que está destinada a reparar el daño causado al sujeto pasivo, que será impuesta por el determinado Juez, cuando encuentre al autor que ha cometido el delito o la falta hacia la otra persona.

Respecto a Espinoza (2010), destaca que se construye la figura en que la ley considera reparable el daño al sujeto pasivo lesionado como la conclusión de un delito, por lo tanto, el beneficio de otorgar un daño (compensación equivalente) o el beneficio de hacerlo o no hacerlo (compensación específica o de su naturaleza).

Con todo lo detallado puedo indicar que la reparación civil está tipificada en nuestra legislación y se da como la conclusión de un delito cometido; está direccionado a que se pueda arreglar el daño que se ha podido generar al afectado. En todo detalle, se puede señalar que las reparaciones civiles están sujetas a nuestra ley y se derivan del delito. Está destinado a servir a los intereses específicos de la víctima o la persona lesionada y se indemnizará o remediará con una multa.

Fontan (1998), afirma que, en el derecho penal, el perjuicio causado por delito puede distinguir entre daño público y daño provocado, particular, y daño o siniestro a consecuencia del hecho delictivo. Dicho de otra manera, la indemnización civil, pública o privada se establece sobre la base de del tipo de daño causado y las consecuencias de la comisión de los delitos realizados.

Es así que, se dice que la sanción que respeta es el derecho a la sanción a ser reconocida como tu propia función y protección a una indemnización civil por intereses sociales, colectivos y daños en común, como una conclusión del delito que ha padecido el afectado.

2. Responsabilidad civil

Esta forma parte de las obligaciones que tiene el imputado para indemnizar los daños y así mismo dar una reparación a los perjuicios que pudieron ocasionarle al sujeto pasivo.

Mazeud (1955 citado en Lozano 2018), precisa que los daños que son generados por este delito, son más sencillos de poder distinguirlo entre el público y privado. Si es público, se genera una alarma social por el hecho producido; si es privado, pues este perjuicio sólo es causado individualmente a la víctima. Las medidas que se adoptan para ambos daños, se encuentran estipulados en el CCP, señalando la pena, el daño, su resarcimiento y la acción civil.

Así, para Castan (1968), cuando se daña públicamente a alguien su compensación se da por la imposición de la pena del delincuente y si el daño es privado este se compensa con exigir el resarcimiento de dicho perjuicio ocasionado y asimismo su reparación civil generada por el delito.

Espinoza (2011), afirma claramente que, cuando se indemniza es porque hay una obligación que ha surgido de la presunción de responsabilidad civil legalmente reconocida. Incluye proporcionar o no una indemnización específica a favor de la parte lesionada; es decir, para demostrar que efectivamente nos enfrentamos a juicios de responsabilidad civil, se debe dar el primer paso para determinar el daño causado. Identificar los hechos que causaron el daño, el daño en sí, las relaciones causales y los factores de atribución entre los agentes que lo causaron.

2.1 Naturaleza jurídica

Se puede señalar que están surgiendo dos tendencias contradictorias, sustentadas en razones coherentes. Lo primero para esclarecer y defender su carácter civil y su fundamento; es que las reparaciones civiles sólo pueden realizarse en juicios penales en circunstancias excepcionales con el objetivo de beneficiar a la víctima y debe realizarse simultáneamente en el proceso penal.

Según Oré (2013), se enfatiza de la siguiente manera. La siguiente discusión:

- a) Conducta civil cuando se realice dentro del marco penal prescrito realizado por su debida Autoridad Procesal Penal.
- b) Conducta civil, obligaciones de protección y prestaciones personales y sociales durante el curso del proceso penal.
- c) El juez que resuelve el proceso civil (motivado por el proceso penal) es una persona capacitada para dicho proceso.
- d) La persecución de un proceso civil en el Procedimiento Penal es preventiva, no reparadora.

Sin embargo, el hecho de que estos procesos en lo civil se inscriban en el Proceso penal es incompatible con lo dispuesto en la ley penal y con la legalidad, los alegatos y sus fundamentos son divulgados, proporcionados y evaluados de acuerdo con los estándares legales, por lo que estas propuestas no son aceptadas. Es subjetivo, específico o personal en las reclamaciones que se formulan en busca de indemnización por los perjuicios o perjuicios ocasionados en relación con los intereses que protege; de lo contrario, por su propio bien, cometen un delito con el fin de reparar el daño en un intento de restaurarlo a su condición anterior. Los jueces penales se basan en estándares civiles, basados en el acuerdo presentado para prescribir la compensación civil a la restitución civil.

2.2. Regulación

La normativa peruana, según su C.P tipifica la reparación civil en el Título VI, Capítulo I. Artículos 92 a 101.

La Reparación abarca:

Que se devuelva el patrimonio afectado, si no hay posibilidad de realizarlo, entonces se brinda el respectivo pago dando lo que corresponde y su

indemnización por el daño causado, porque da dos posibilidades: devolver el bien, el objeto de la infracción, o el valor como indemnización "

Gálvez (2009), afirma la restauración a su estado original puede incluir la devolución de un artículo ilegal que ha sido robado tipo. Todas las exclusiones ilegales y penales en caso de perjuicio o difamación.

Según Pizarro (2002), se desprende que un tercero tiene derecho a entablar una acción civil contra la persona que lo proporcionó. En otras palabras, también se aplica a los delitos de honor y los delitos de honor. Indemnización

La segunda forma es pagar el valor del bien establecido por la víctima, según lo dispuesto por nuestra ley penal, de tal forma que forme parte del patrimonio del afectado.

La tercera forma de reparación, es la indemnización por el agravio generado y a la vez perjuicios.

2.3. Funciones de la Responsabilidad Civil

Ikehara (2018), precisa que, en el Estado peruano, el aspecto legal ha sido fundamental para el reconocimiento en cuanto a la reparación civil, previsto como un modelo que tiene la intención de indemnizar el daño delictivo hacia una persona.

Barbieri (2015), manifiesta que, tenemos el deber de no perjudicar a otro, sin embargo; si esto es violentado, se genera automáticamente la responsabilidad de recomponer el daño causado. Así haya algún tipo de deber de responder de forma contractual o extra, o alguna facultad dentro o fuera de la subjetividad.

Para Espinoza (2011), la indemnización es la obligación del producto de una presunción legítima de responsabilidad civil, incluidas las disposiciones sobre si hacerlo o no en beneficio del acreedor que ha sido perjudicado. En otros términos, nos encontramos ante este tipo de responsabilidad. El proceso de determinar el daño causado "debe hacerse" para demostrar que se enfrenta a un incidente.

La relación causal entre el evento adverso, la lesión (resultado) en sí y el agente que la causó. La determinación del factor de atribución para determinar posteriormente la responsabilidad del infractor puede ser la sustitución de un activo por dos tipos de naturaleza o equivalentes, o productos de la misma naturaleza. Bienes dañados en el caso de daños irremplazables, o bajo la influencia de bienes materiales que son legalmente protegidos, por los cuales los daños se realizan de manera equitativa.

Hay dos elementos componentes de acción correctiva, estos son:

a. Compensación financiera o su equivalente basado en la compensación que sea de utilidad a la víctima según el daño causado.

b. Por lo general, un método o forma de compensación es reconstruir la condición física antes de que ocurra el daño, como una jurisprudencia que sea de utilidad por una situación tangible.

Según Velarde (2014), la naturaleza del proceso penal, según las opiniones de diversos doctrinarios entre si ésta tiene la esencia civil o penal; nuestra ley obliga a aclarar que la indemnización a través del Código civil.

Núñez (2014), manifiesta que, existen actos ilícitos punibles y otros actos que sólo crean la obligación de indemnizar al lesionado. a, Actos ilícitos, b, Actos civiles ilegales.

a. Hecho ilícito penal

El hecho ilícito penal son las conductas que van contra los valores y que merecen castigo con penas que se encuentren tipificadas en un ordenamiento jurídico, es decir que se consideren faltas o delitos; pues lesionan el interés particular y producen daño a un tercero.

De acuerdo con Núñez (2014), la actividad delictiva también genera responsabilidad civil". Responsabilidad civil, tal como se caracteriza por el artículo 92 del C.P. Este, se determina con penas, todos los cuales están estipulados en el Título VI, del Código mencionado; así mismo las autoridades

judiciales antes mencionados respecto a la compensación a las consecuencias civiles.

En esta última instancia, la imposición de sanciones incluyendo la condena y la compensación de todas las consecuencias perjudiciales causados por un delito o negligencia, además del daño que debe ser reparado como resultado de un delito. Cumpliendo de esta manera con las disposiciones ubicadas en el C.P y teniendo como complemento el C.C si se trata de la reparación.

b. Hecho ilícito civil

En la responsabilidad civil, su objetivo principal es arreglar el mal generado, es decir, exigir una indemnización, determinando qué bienes deben reincidir los alcances siendo consecuente en los actos que generen lesividad. En el C.C. de Perú, el reglamento que es base para este tema se establecen en el Volumen VII.

2.4. Elementos comunes a todos los casos de responsabilidad

a. En primer lugar se encuentra el daño, es el elemento importante de utilidad para la persona que ha sido lesionada, para que este individuo ejerza la acción por responsabilidad civil.

b. Relación de causalidad, incluye los daños causados por un acto u omisión que puede calificarse de culpa, conforme lo tipifica el artículo 1985 del Código Civil peruano.

c. Vías para dar la reparación a este daño; se da cuando el juez penal tiene autoridad para conocer los hechos que, por constituir un delito, tiene autoridad para imponer sanción. En caso de que se produzca un acto que pueda constituir un delito grave o una infracción, se podrá entablar penalmente una acción en contra de la persona que cometió el delito. Es por ello que se puede actuar civilmente siendo interpretado como algo ya realizado, a menos que la parte agraviada renuncia o se reserva el derecho de ejercitarla en asuntos civiles.

En este proceso penal, si el sujeto pasivo, ya forma parte civil, porque no renunció o se reservó la acción de realizarlo, como resultado se dará la condenación en la sentencia, por lo que, en el Tribunal será exigible la parte civil que es la reparación, citada en el artículo 92 (C.P.P)

En cuanto a la responsabilidad tiene que gestionarse civilmente por el delito, el juez según su materia, en este caso penal, tiene que velar que se aplique esta responsabilidad civil, tipificado en el C.P, en su artículo 101 y sobre todo las disposiciones del C.C.

d. El daño que ha generado este delito, para repararlo se debe observar lo que tipifica el art 93 del C.P, donde cita e indica que si no es posible la restitución del bien se debe pagar lo que vale e indemnizar según la equivalencia del daño generado.

Como complemento se observa también el art.94 del C.P que protege el bien, especificando su restitución.

e. El argumento de indemnización se debe fundamentar por lo tipificado en el artículo 1985 del C.C; siendo necesaria la consideración de este artículo por la manera en que se generó en daño (acción u omisión), teniendo en cuenta el lucro cesante, si ha sido dañada moralmente la persona, encontrado en el artículo 1984 del mismo código (C.C), revisando el interés legal considerando el primer momento donde se dañó el bien.

f. La prescripción legal.

Citando el artículo 2001 del Código Civil peruano, que indica:

- a. A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.
- b. A los siete años, la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado.
- c. A los tres años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral.

- d. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo.
- e. A los quince años, la acción que proviene de pensión alimenticia.

Peña (2010), estipula que las sanciones tienen por objetivo, en primer lugar, restablecer la paz social y, en segundo lugar, brindar la indemnización que está destinada a reparar el daño causado al sujeto pasivo, que será impuesta por el determinado Juez, cuando encuentre al autor que ha cometido el delito o la falta hacia la otra persona.

Respecto a Espinoza (2010), destaca que se construye la figura en que la ley considera reparable el daño al sujeto pasivo o también conocido como lesionado como producto de un delito, por lo tanto, el beneficio de otorgar un daño (compensación equivalente) o el beneficio de hacerlo o no hacerlo (compensación específica o de su naturaleza).

Fontan (1998), afirma que, en el derecho penal, el perjuicio causado por delito puede distinguir entre daño público y daño provocado, particular, y daño o siniestro generado por la falta. Dicho de otro modo la indemnización civil, pública o privada se establece sobre la base de del tipo de daño causado y las consecuencias del hecho delictivo.

Espinoza (2011), considera que la indemnización civil es parte de acción privada, no de manera pública, porque tiene aquella naturaleza jurídica y su responsabilidad civil, su indemnización civil como el proceso penal son causados por un mismo delito.

2.5. La reparación, instrumento autónomo en la prevención

Roxin (1999), enfatizó que la compensación ciudadana no es un sistema puramente civil ni un subproducto de la imposición de sanciones, sino que se basa esencialmente en el logro del propósito de la sentencia. Es una herramienta autónoma en el campo de la opresión y la opresión. De todo lo anterior, a menudo se nos pregunta si las sanciones y formas de sanciones que van más allá de la

seguridad son aceptables. Según este autor, si los legisladores tienen plenamente en cuenta las sanciones compensatorias, sólo tres formas pueden hablar de derecho penal, por lo que se está discutiendo esta tercera vía. Es sólo la compensación por el daño causado. Un método diferente al sistema actual.

2.5.1 Criterios

La reparación civil se basa en los principios o doctrina que pueda tener el juez, esto motivará y definirá el monto que será destinado por parte del sujeto activo a la víctima por el agravio que se cometió contra él.

En exactitud sobre los principios o criterios para definir el monto de dicha reparación civil, nuestra legislación no lo establece; sin embargo, con ayuda de la doctrina, sí podríamos definirlo.

Según Palacios (2006), sostiene que es posible establecer un monto o quantum de la reparación civil.

E primer lugar, evaluando la gravedad del delito del autor; es decir que, si el sujeto activo tiene mayor colaboración en el hecho delictivo, mayor será la gravedad que pueda repercutir en el delito.

Así mismo, que tan intenso fue el suceso que perturbó a la víctima; es decir se debe tener en cuenta al sujeto pasivo en su aspecto psíquico que tanto alteró en sus emociones, dicho acto, la consideración de los años que esta tenga, su identidad sexual y el tiempo de duración del daño causado.

Cabe considerar que, los operadores del derecho tienen en consideración que el dolor o la afectación que se le ha generado a la víctima es muy fuerte; apoyando el término de la sensibilidad de la persona que ha sido agraviada y también se evalúa los vínculos consanguíneos.

Con dichos puntos de la doctrina, se puede dar un alcance más acertado sobre cuál sería la suma de dinero ideal de la reparación civil que se debe otorgar a la víctima.

2.5.2 La fundamentación del concepto material del delito en el principio de lesividad social

Según Roxin (2020), indica las publicaciones mencionan que el concepto importante de delito ya no se basa en la ley moral, el estándar moral, sino en la necesidad de fiestas sociales. En otras palabras, el derecho penal tiene como carácter la existencia social donde la penalidad es impuesta por el resguardo de la autonomía personal y la solidez social, y los ataques a la sociedad. Sin embargo, el Estado debe mejorar las relaciones sociales entre la libertad, la certidumbre de protección de sus ciudadanos, y al incidir en su conciencia legítima del delito y en la comunidad, el propósito de la sentencia es evitar la actividad delictiva.

2.6. Controversias de la reparación civil

La controversia tiene larga data.

Según lo tipifica el Código Penal peruano, la reparación civil derivada del delito y tiene un tratamiento, al respecto ni teóricos, ni dogmáticos, ni jurista alguno, han uniformizado criterios sobre su naturaleza jurídica de este instituto.

Si revisamos previamente y de manera sumaria, breve, la jurisprudencia emitida por el TC y el Poder Judicial en Perú, veremos el origen de los múltiples problemas derivados en torno a la reparación civil en el proceso penal.

La interpretación realizada por el T.C y el Poder Judicial sobre la naturaleza jurídica de la reparación civil, ha resultado tan discordante.

El T.C sostiene que no se trata de una obligación de orden civil (Exp. 006952007-PHCITC, Exp. 5589-2006- PHCITC, Exp. 3953-2004-HC/TC) sino de una verdadera condición de la ejecución penal.

El Poder Judicial ha reiterado a través de su jurisprudencia y de acuerdos plenarios, que la reparación tiene una connotación exclusivamente civil y que su tratamiento en el proceso penal se sustenta esencialmente en razones de economía procesal, pues si esta posibilidad no se le diera al Juez Penal, tendría que constituirse por cada proceso penal un proceso civil para que se ventile el

tema de la indemnización, lo que resultaría inmanejable”. (A.P. N° 5/99 del 20/11/1999).

De lo mencionado se colige que para el P.J. la reparación civil se encuentra incluida en el proceso penal sólo por razones de economía procesal, motivo por el cual no tiene ninguna diferencia en la naturaleza jurídica de la reparación si ésta es discutida en la vía penal o en la vía civil.

Ahora bien, estas discusiones no sólo se dan en el contexto jurisprudencial en el marco de las resoluciones del P.J. y del T.C., sino también son producidas en el marco doctrinario. De esta manera, aquellos que sostienen que la naturaleza penal de la reparación civil, se sustenta en el hecho del tratamiento que merece la reparación civil procedente del delito dentro del ordenamiento penal, pues, como bien se señaló anteriormente, en el caso del C.P. ésta se encuentra regulada en los artículos 92- 101, pero otros que sostienen que la reparación civil no se debe considerar de naturaleza penal.

Según Puig (1959), sostiene que la reparación civil tiene función reparadora y es de naturaleza penal, por la cual se debe restablecer el derecho lesionado,

Según Gálvez (1999), afirma que la reparación civil no puede configurar bajo ningún supuesto una sanción jurídico penal, ya que se sustenta en un interés particular, tiene naturaleza distinta de la pena.

2.7. Análisi del Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116

Según el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 en su fundamento 25 sostiene que, la acción civil ex delicto, entendiéndose como el daño que se causa a la víctima con la comisión del ilícito penal en su agravio, el mismo que debe ser reparado dentro del proceso penal; es decir esto en razón de que el delito tiene una conducta ilícita que genera una obligación civil, siendo esta independiente de la acción penal, aclarándose que del delito no nace la acción civil, como tampoco hay obligaciones que nazcan de los delitos, pues se trata de dos obligaciones autónomas puesto que la sanción penal tiene fines preventivos, en tanto que la responsabilidad civil tiene como finalidad reparar el daño causado.

Según el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 en su fundamento 30 sostiene que, tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal han incorporado dos principios fundamentales que son: la autonomía de la acción civil frente a la penal y la necesidad de un pronunciamiento expreso sobre la materia, aclarándose que frente a un sobreseimiento o una absolución, corresponde imponer una reparación civil.

Según el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 en su fundamento 31 sostiene que, la competencia funcional para la tramitación de la reparación civil y los medios probatorios que sustentan la misma con la intervención de las partes corresponde al Juez de la Investigación preparatoria, correspondiendo la decisión de la fundabilidad o no, al Juez Penal en el curso de la Audiencia correspondiente.

Según el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 en su fundamento 46 sostiene que, la reparación civil queda expedita a su cobranza a partir del momento en que la sentencia queda consentida o ejecutoriada sin necesidad de un nuevo proceso, ya que es la continuidad de un derecho sentenciado, sin embargo puede formularse el cobro vía acción.

Según el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 en su fundamento 47 sostiene que, la caducidad del pago de la reparación civil no está normado por el código procesal penal, por lo tanto, no puede fijarse un plazo que la ley no determina, más aún si admite interrupciones.

Según el Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 en su fundamento 48 sostiene que, no hay que olvidar que la prescripción no solamente depende del vencimiento del plazo, sino también de la voluntad de exigir el cobro por parte del agraviado ya que con ella puede lograrse el corte del plazo, por lo que se concluye afirmando que para quien ejerce la prescripción es necesario que trascurra el plazo y la inacción del interesado.

En la vinculación precedente al Acuerdo Plenario N° 04-2019/CIJ-116 el legislador peruano mostró interés en superar las exigencias de la racionalidad legislativa, en materia de libertad de expresión, a través de las iniciativas legislativas presentadas entre los años 2006 y 2019, ya que pese a la corriente

para la despenalización de los delitos contra el honor, impulsada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría para la Libertad de expresión, dichos proyectos no fueron aprobados.

3. El delito de difamación. Definición

Según la Enciclopedia Legal (2020), la difamación establece claramente que implica la introducción de sucesos que socavan la reputación o el estudio de una persona o una autoridad acreditada.

A. Descripción típica

Según el Código Penal peruano, regula específicamente el área del art. 132º: Una persona que se ha reunido o separado frente a muchos, pero se debe a hechos, cualidades o conductas que pueden dañar el honor de una persona de manera que pueda difundir la noticia, o por causa de esto. será castigado con la libertad en el plazo de dos años y multado de 30 a 100 días.

También establece, si la difamación involucra los hechos que se encuentra articulado 131, la privación de libertad no debe ser entre 1 o 2 años. Así mismo que si el delito es cometido, ya sea a través de un libro, medio informativo, la pena será por no menos de uno, ni mayor de tres años.

B. Bien jurídico a proteger

El bien a proteger, es la reputación de las personas naturales y jurídicas.

El honor de una persona en el campo judicial se reconoce cuando las personas aprecian nuestra conducta moral y social, nuestras cualidades y valores morales y éticos. (Exp. N°: 4732-97-Lima).

La difamación es más grave cuando se lleva a cabo a través de la publicación de algún libro, periódico y diversos medios de difusión masiva haciendo que tenga un impacto más significativo.

3.1. Elementos del tipo penal objetivo de la difamación

Según lo prescrito por nuestro sistema legal, cada tipo de delito tiene un lado tanto objetivo como subjetivo; sin embargo, e ingresando a la contextualización del objetivo de este tipo.

El legislador en el transcurso de los años ha recogido todos los puntos de referencia típicos que el intérprete debe observar para que un acto sea considerado conforme a la ley penal.

Precisamente el delito de difamación incluye el consentimiento de determinados elementos como: el operador, el sujeto pasivo, el verbo modificador, medios y forma de cometer dicho delito.

Se tiene en cuenta también el comportamiento difamatorio típico, éste incluye la difusión de información o noticia que dañe el honor de una persona.

El antecedente penal peruano expresa que, la difamación se comete en la propagación de una noticia falsa a cierta cantidad de personas al atribuir un hecho que lesiona la reputación de una persona. (Expediente N° 3844-97-Lima).

3.2. Elementos del tipo penal subjetivo de la difamación

Este delito de difamación tiene que ser cometido dolosamente y no puede llevarse a cabo a la ligera como cree la mayoría de la sociedad.

La intención del sujeto, incluye el conocimiento y la voluntad de éste; es decir, si el agente activo difunde la noticia y perjudica a alguien, en cuanto a un hecho, una característica o comportamiento, se producirá una conducta delictiva, porque está perjudicando el honor mancillado de otra persona.

Desde la perspectiva de la imputación subjetiva, la existencia del querer hacer no es suficiente, el comportamiento de este delincuente debe mostrar una voluntad de dañar el honor de la víctima.

Un registro de antecedentes penales establece que la lesión mental es predominante en los casos de prensa (Exp. N° 4149-96-Lima).

En el caso de la prensa tal como se precisa en el expediente mencionado anteriormente tiene que existir la intención de difamar a otra persona que pertenezca al mundo mediático y no dar una verdadera noticia.

3.3. Tentativa y consumación

Villavicencio (2013), afirma que cuando se consuma el hecho delictivo es cuando el sujeto implementa activamente elementos de tipo objetivo.

Es decir, este debate ha generado distintas opiniones; ya que, unos consideran que el delito puede consumirse con la simple imputación de un hecho que cause perjuicio al honor de quien se habla, sin embargo, para otros, se puede consumir cuando haya alguna noticia que difame a la persona.

Así mismo como parte de la bibliografía citada con respecto a la individualización de la pena, Zaffaroni (2002), opina que según el accionar que ha privado los bienes del sujeto pasivo, se debe dar aplicación a la pena. La cuantificación de la pena, siempre tiene que prever el efecto positivo que pueda surgir para su cumplimiento.

3.4. Autoría y participación.

El delito de difamación, se comete a través de los medios de comunicación o de diferentes medios sociales que afectaron el honor de una persona y que la realizó de manera dolosa y para generar más visualizaciones, es aquí donde se distinguirá la autoría y participación.

Dicho de otra manera, el autor que pueda cometer el delito de difamación es la persona que controla los hechos; es decir, para divulgar o difundir noticias ofensivas contra el honor de la víctima con la intención de que una gran cantidad de personas puedan alcanzar a ver o escuchar esta información.

Cabe recalcar que, en los casos de coautoría penal, cuando se confirma la existencia de presuntos hechos, también deben presentarse el “co-dominio” de estos; es decir, que la propagación de las noticias falsas, injuriosas para el honor del sujeto pasivo, hayan sido elaboradas por más de dos sujetos.

Las personas mencionadas han tenido que producir esta difamación bajo la división de tareas, la toma de decisiones conjunta y la ejecución parcial con ánimo doloso.

SUB CAPÍTULO V: DAÑO MORAL O EXTRA PATRIMONIAL

1. Daño moral. Definición

Para Casal (2003), manifiesta que el daño moral es el quebranto que puede tener un ser humano, en la que no es afectado su patrimonio, por lo que monetariamente no puede satisfacerse.

La Corte Suprema de la Republica peruana señala que este daño tiene un apego directo a lo que puedan sentir las personas los sentimientos de las personas y a la vez por esta conmoción generada puede producir pérdidas económicas.

Este daño necesariamente afecta a lo que no se ve directamente, a los sentimientos, está en el campo de la afectividad y también puede producir pérdidas económicas; no tiene que equivocarse con el patrimonio que surge de una obligación.

La doctrina española, francesa e italiana sostienen que es un error denominarlo daño moral y prefiere el término patrimonial.

Según, De Ángel (2008), indica que se utilizan como sinónimos sin que haya reciprocidad en ellos, para él, son debido a los sentimientos, dignidad, estima y creencias.

De acuerdo a Espinoza (2013), la legislación Civil peruana lo denomina daño extra patrimonial.

A. Daño emergente o indirecto

El concepto de daño indirecto se considera el daño dejado por la víctima o el perjuicio que esta sufrió. Consecuencias de una infracción derivado de un pacto o actividad ilegal.

Pizarro (2002), describe así el daño urgente, es la pobreza, la pérdida o el patrimonio del legado realmente sufrido". Por ejemplo, una persona que utiliza

un vehículo para ir al trabajo provoca un accidente. El equipo de daños consecuentes cubre el costo de un vehículo dañado.

Se presenta otro punto de vista según el cual el daño indirecto es la pérdida del patrimonio por el abuso, es decir la pobreza, porque las consecuencias no siempre son inmediatas. Estos son los costos inmediatos y futuros, como las facturas de los medicamentos utilizados para la cirugía y los costos de la terapia de rehabilitación.

Sin embargo, esta proposición sostiene que el perjuicio del patrimonio asociado con este tipo de perjuicio resulta de las acciones del delincuente, y que el perjuicio futuro es incomprensible. Por ejemplo, gastos incurridos por actividades ilegales. Es posible evaluar por qué no es parte de perjudicarse en algún momento.

B. Lucro Cesante

Pizarro (2002), afirma que lo que la víctima no recibe en ganancias de capital puras.

Espinoza (2007), dice claramente el rendimiento que ya no es percibido, o el no aumento de ganancias debido al malestar del patrimonio. Por ejemplo, cuando hay una operación defectuosa en la que el herido no puede seguir trabajando, ya no recibe ingresos normales. Víctimas y heridos no lo recibirán.

El lucro cesante por daño económico debe compensarse mediante la prueba de la existencia de una actividad ilícita y debe entenderse como un lucro cesante o una ventaja económica no percibida por la víctima o el perjudicado.

1.1. Regulación

Según lo tipificado en el artículo 1322, de nuestro código civil peruano, indica que cuando el daño moral, se hubiera irrogado, también es susceptible de resarcimiento.

Nuestra legislación civil expresamente dicta que se exige que se pague por el daño moral causado, claro está tiene que demostrarse a través de diferentes medios probatorios para dar razón a lo mencionado.

Según el artículo 1984 tipificado en nuestra legislación del código civil peruano, indica que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia.

En otras palabras, esta restitución debe tener en cuenta no solo la extensión y condición del malestar que ha podido afectar a la persona, sino también al grupo familiar en el caso del derecho penal. La doctrina de este análisis normativo ha demostrado que en este Código Civil peruano en el mismo art 1984° establece que los daños no monetarios estipulan que el nivel de indemnización por daños inmateriales debe estar de acuerdo con lo establecido en este artículo apropiado a la magnitud de la afectación a la víctima y familiares.

No obstante, el citado artículo tiene sus limitaciones a indicar los puntos de vista legales para la liquidación del desagravio por daño psíquico, sin embargo, omite la forma de probar la extensión y daño que ocasiona a las personas, por lo que existe una dificultad en el conocimiento de la figura o mecanismo para probar o confirmar el hecho. que es sujeto de impuestos. Por tanto, conforme a lo dispuesto en la materia, le corresponde al juez indicar el monto.

León Barandiarán (1984), sostiene que las reparaciones deben hacerse con una suma de dinero, y que, como propietario adicional, solo se puede reparar con una indemnización; de lo contrario, el perjuicio moral no se puede corregir, excepto en circunstancias muy inusuales.

El juez tiene amplios poderes para resolver el daño moral generado y está obligado a dictar la cantidad que debe pagar. En 2013, la Sección de Transición Civil de la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el perjuicio emocional podría atribuirse a dificultades para probarlo.

Según la casación 4844-2013, en su noveno considerando, indica que el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo; es decir el daño que afecta la esfera interna del sujeto, afectando sentimientos, valores y no aspectos materiales.

En esta categoría del daño es particularmente difícil de acreditar, debido a que las personas no expresan sus sentimientos o emociones del mismo modo, siendo, inclusive, para algunas personas simular sufrimientos o lesiones sin que existan en la realidad. Además, en algunos casos, ocurre que los sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto.

Según la casación 4844-2013- Lambayeque, en su décimo considerando, indica que cuando es difícil acreditar el daño moral, es el juez quien opta por valorar la existencia del mismo.

1.2 Criterios para establecer la Reparación

La cantidad de dinero para reparar el daño moral provocado, se basa según los principios creados en las legislaciones según su Estado.

Según Palacios (2006 citado en Poma 2013), ha manifestado que para determinar el quantum de la reparación civil por daño moral debe cumplirse con los siguientes requisitos; es decir en:

- a) gravedad del delito; es decir la magnitud en que se encuentre involucrado el investigado en la puesta en peligro del bien jurídico o lesión de la legislación al cometer un acto contrario a la norma.
- b) la intensidad de la perturbación anímica, decir se tendrá en cuenta el dolor, edad, sexo, circunstancias en que se lesionó a la persona.
- c) la sensibilidad del ofendido; es decir se tiene en cuenta el desarrollo mental del individuo, su moral, costumbres, pues mientras éstos sean más elevados más se acentúa el dolo.
- d) las condiciones económicas y sociales de las partes, no se ha considerado por ser contrario a la percepción humana y al principio de igualdad.
- e) se tendrá en cuenta si son cónyuges o concubinos o tienen algún grado de parentesco.
- f) el estado de convivencia familiar

2. Jurisprudencia

2.1 La jurisprudencia nacional

- a. Según la casación citada en el expediente N° 3220-2002, indica que el daño moral implica un daño profundo en el individuo, el mismo que es de difícil de expresar su magnitud, pero no imposible, pues genera daño subjetivo.
- b. Según la casación citada en el expediente N° 950 – 1995, indica que el daño moral es resarcible y se puede cuantificar de manera económica, ya sea que se derive de una responsabilidad contractual o extracontractual, elección que ha sido atendida en nuestra legislación del código civil peruano de 1984.
- c. Según la casación citada en el expediente N° 3220-2002, indica que todo daño patrimonial o no patrimonial es cuantificable, por lo que se puede usar los informes contables, económicos, de rentabilidad del negocio, un análisis costo-beneficio; dependiendo de las necesidades del proceso y si el juez lo considera también puede solicitar a las partes, nuevos medios de prueba que le permita expedir su sentencia.
- d. Según Osterling (2005), manifiesta que el daño moral es subjetivo y se acerca más a la afectividad que a la realidad económica, pero puede ser indemnizable.

2.1.1 Análisis de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional Peruano

Citando a Huerta (2010), sostiene que existen límites a la libertad de expresarse. Haciendo la referencia a que, si el objetivo de difamar puede hacerse valer de otra forma, no debe haber una calificación en cuanto a restringir la difusión de edad, siendo innecesario.

El Tribunal Constitucional peruano, en el Exp. N.º 0905-2001-AI/TC, precisa que, para ser merecedores de protección constitucional de libertad de información, se requiere sea información real, lo que demanda la posesión de los deberes y la obligación de responder por parte de quienes están informando; por lo que, demuestra que el objeto a proteger es que todos tengan una comunicación totalmente libre, que no sea privada la libertad de información, ni mucho menos la forma de expresarse, pero la condición para que el Estado peruano pueda proteger constitucionalmente este derecho, es que la información sea verdadera.

Por lo tanto, mientras el país se encuentre en un Estado de derecho, existiendo la democracia, donde se permita la libertad de expresión, como se precisa observa en la motivación del Exp. 02465-2004-PA/TC, en referencia a la libertad para expresarse, que es significativo, porque garantiza el debate y la audiencia debe ser tolerable, pero todo con medida, sin sobrepasar ciertos límites; debido a que el poder ejecutar este derecho, trae consigo los deberes y también una responsabilidad frente a terceros, así mismo para la organización donde este sujeto activo pueda encontrarse.

Por lo tanto, poder afirmar que este es un derecho sin límites, es incorrecto ya que nuestros legisladores no han podido establecer la garantía de que tenemos derechos absolutos.

3. Jurisprudencia Internacional

3.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pronunciamiento

Cuando se aprecia el sentido concreto de la libertad de expresión y también a la información con facilidad nos encontramos en conflicto con otros derechos legales y debe sopesarse con las características de las ideas

difundidas y aceptadas, lo que no es infrecuente. Es por ello que, la pronunciación de la CIDH es relevante en estos casos como materia de estudio.

Según el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Según el artículo 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, indica toda persona tiene derecho de no ser molestado a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.

SUBCAPÍTULO VI: DEFINICIÓN CONCEPTUAL, OPERACIONALIZACIÓN

1. Definición conceptual

A. Derecho a la Libertad de expresión

Según la RAE (2005), manifiesta que es un derecho en que la persona, tiene la decisión de hacer o no hacer, tomando la responsabilidad de sus acciones sea para bien o para mal pudiendo traer consecuencias consigo.

B. Derecho a la libertad de información

Tal como señala Núñez (2005), cuando se refiere al derecho a este acceso informático, se puede dividir en dos posibles situaciones; es decir cuando la sociedad tiene el conocimiento de cierta información sin que el Estado haya podido manejarla o moldearla según su agenda, ni poder impedir que alguien pueda brindarla y cuando antes de ser publicada cierta información esta ha sido censurada, objetivamente para su difusión a los ciudadanos conteniendo una supuesta información real de los sucesos para evitar las falsas noticias.

C. Derechos Fundamentales

Para Alexi (1993), manifiesta que estos derechos son la base sólida de un Estado, ya que están considerados de manera esencial en la Constitución Política, por lo que, deben ser respetados.

D. Difamación

Según la Enciclopedia jurídica (2020), nos brinda una idea más clara al respecto como una contravención o delito, donde se tiene que afirmar un hecho o acción, generando un malestar a la honra de la persona natural o jurídica.

E. Responsabilidad Civil

Esta puede identificarse dentro del Código Civil Peruano, ya que es una fórmula legal donde se evalúa el resarcimiento del daño moral que ha sido causado por la acción ilegal de una persona, mancillando el honor de otra.

F. Reparación civil

Para Espinoza (2011), esta es definitivamente un deber, que es el resultado de la consecuencia de la responsabilidad civil, claro está con su acreditación respectiva por un daño que se ha generado. A través de una indemnización.

G. Daño moral

Esta es la afectación subjetiva que se realiza a la víctima después de haberse cometido el “delito contra el honor” ya que, está en tela de juicio su vida personal, laboral o familiar, el tipo de reputación que pudo haber adquirido y otros supuestos. Este daño moral, genera una indemnización para parte del delincuente hacia su víctima.

H. Lucro cesante

Esta es, el beneficio del sujeto pasivo la ganancia pecuniaria o patrimonial que ha recibido por haber sido dañada en distintas maneras.

2.Operacionalización de variables

Variable independiente (V.I)

Difamación. Hechos que socavan el honor o moral de una persona, o autoridad acreditada.

Variable Dependiente (V.D.)

Libertad de expresión, ya que este es considerado un derecho que tiene la persona de hacer o no hacer, tomando responsabilidad de sus acciones.

Reparación civil, es el resultado, consecuencia de la responsabilidad civil, acreditada por el hecho punible generado a través de una indemnización.

Variable Independiente	Dimensión	Indicador	Técnicas e Instrumentos
Delito de Difamación	Constitución Política del Perú	Art. 2. Inc. 4.	Encuesta Cuestionario
	Leyes nacionales	art° 132 CP art° 19 CC	
	Leyes internacionales	ONU, OEA, CIDH	Encuesta Entrevista Guía de entrevista Análisis documental

Variable dependiente	Dimensión	Indicador	Técnicas e Instrumentos
Libertad de expresión	Constitución Política del Perú	Art. 2°. Inc. 4	Encuesta Entrevista Guía de entrevista
	Legislación nacional	92° - 101° CC Violación a la intimidad Daño al honor	

Reparación civil	Indemnización C.C	Art. 1322, y 1984. Código Civil	Encuesta Cuestionario Entrevista Guía de entrevista
	Legislación internacional	DUDH art 19° PIDCP.art 19.2° CADH art 13°.1	Análisis documental

Fuente: Constitución Política del Perú

Código Penal 2021

3. Hipótesis

Si se propone y acepta la modificación del artículo 132° del Código Penal Peruano, penalizando el incumplimiento de la “Reparación Civil”, aun cuando no se imponga como norma de conducta, a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional se reducirá el delito de difamación.

CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

1. Tipo de investigación

Pertenece al enfoque cuantitativo, empirista, positivista porque parte de la teoría, la cual es utilizada para analizar, entender y explicar la realidad del problema. Hernández, et al (2010).

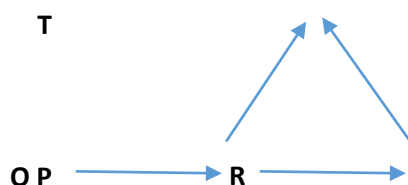
1.1. Diseño de investigación

El diseño trabajo es no experimental, desde el punto de vista del alcance temporal es transversal o transeccional porque se tomarán datos en un solo tiempo oportuno.

En cuanto a los objetivos propuestos esta será aplicada y propositiva.

Aplicada: Porque realiza las acciones legales pertinentes, que apoye la transformación positiva, produciendo este tipo de cambio para el beneficio de la sociedad, en un sector de la ciudadanía.

Propositiva: Porque presenta una modificatoria del artículo 132 del Código Penal Peruano, para penalizar el incumplimiento de la Reparación Civil mediante el siguiente esquema.



Donde:

O: Observador (investigador)

R: Realidad problemática

T: Base teórica

P: Propuesta

2. Método de investigación

Se aplicaron los siguientes métodos:

Empírico, porque se visualizó, en un plano general toda la información a fin de realizar el procesamiento adecuado del informe final.

Descriptivo-propositivo, porque se describieron las problemáticas existentes y se propuso solución al problema.

Analítico, Se obtuvo y analizó la información requerida sustentar doctrinaria, jurisprudencial y legalmente el marco teórico, permitiendo de esta manera estudiar la propuesta presentada con que se sanciona el incumplimiento del pago de responsabilidad civil por coaccionar la libre expresión como bien jurídico protegido.

Exegético: Se basa en poder analizar la parte legal en cuanto a la tipificación subjetiva u objetiva que pueda haber en cuanto al delito de difamación, y como consecuencia la evaluación de la responsabilidad civil.

Dogmático: Roxin (2009), manifiesta que es la parte donde el investigador realizó el debido análisis de la información que tiene consigo y la ejecución de las disposiciones legales dentro de la Constitución, C.C y C.P y distintos puntos de vista de los doctrinarios del campo en estudio.

Este análisis definir mejor los conceptos de la doctrina, cuando se precisan los derechos constitucionales y garantías que existan, mencionando al resguardo del amparo jurídico efectivo y el de defensa a la libertad para poder expresarse, enriqueciendo este trabajo de investigación.

Hermenéutico - jurídico: Se realizó el análisis crítico y fundamentado de las teorías en que se sustenta la investigación, así como la norma legal del tema a investigar.

Histórico: Permitió abordar todo el proceso en cuanto al objeto de estudio, desde los antecedentes mediante niveles, a nivel nacional e internacional, para sustento y defensa del informe.

3. Diseño de contrastación

Para verificar la hipótesis se tuvo en consideración el criterio de jueces expertos temáticos y metodólogos sobre la propuesta realizada, así como el análisis de la encuesta realizada.

Este proceso de verificación se realizó de la siguiente manera:

A través de la verificación por documentación: Se hizo las diferencias y similitudes entre un enunciado que formó parte de la hipótesis, realizada con los principios adecuados y realizado con sustento que acreditara la calidad del trabajo de investigación.

En esta ocasión ha sido utilizado el análisis de contenido y la fuente documental de la información fueron las sentencias judiciales. A partir de esta comparación, se realizó conclusiones sobre la veracidad de la hipótesis.

4. Población, muestra y muestreo

4.1. Población

La población de este estudio la conformaron 12 individuos distribuidos de la siguiente manera: 3 jueces penales, 3 abogados civilistas y 6 abogados penalistas. Además 2 sentencias las cuales fueron objeto del análisis de contenido.

4.2. Muestra

Precisamente porque la población es pequeña, se ha tomado como muestra la totalidad de esta. La selección fue por conveniencia.

5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

5.1. Técnicas de recolección de datos

Las técnicas son diversos métodos individuales que pueden ser aplicados en la etapa de la investigación que se esté realizando. (Ñaupas et al, 2013,

p.100). Dichas técnicas fueron 2, de campo y de gabinete, estas fueron empleadas en el informe ya que consiste en consignar los datos obtenidos en el transcurso de la investigación, para guardar estos datos fácilmente y comprender mejor la información.

5.1.1 Técnicas de campo

5.1.1.1 La encuesta

Se utilizó para determinar tendencias a las preguntas que se formularon a los objetos a estudiar. Así mismo, se puede afirmar que estas preguntas para la unidad de estudio de nuestra muestra, tienen la finalidad de poder analizar el punto de percepción de ciertos hechos.

Pino (2010), considera que parte de las técnicas que se desarrollan encima de una base sólida del instrumento que considere apropiado el investigador.

5.1.1.2 La entrevista

Citando a Ñaupas (2013), manifiesta que la entrevista es una charla seria y respetuosa que se da entre la persona que investiga y el entrevistado, consiste en realizar las interrogantes de manera verbal, con la intención de conseguir una contestación acertada que permita corroborar con la hipótesis de trabajo.

Incluye hacer preguntas verbalmente para obtener respuestas o información, y verificar o fundamentar hipótesis de trabajo.

5.1.1.3 El análisis de contenido

En opinión de Ruiz (2012), permite revisar e interpretar el argumento contextual de los documentos que puedan existir en las plataformas virtuales o libros físicos.

5.1.2 Técnicas de gabinete

Esta técnica hizo posible recopilar toda la información de forma organizada y bien estructurada. Se llama de esta manera, porque investiga,

analiza la información de jurisprudencias y otros documentos continuando dicho proceso en la visualización de escritos y gráficos.

5.1.2.1 El fichaje

Palomino (2015), manifiesta que consiste en examinar los diferentes datos obtenidos ya sea por medios o dispositivos que considere pertinente el investigador, para guardar estos datos fácilmente y comprender mejor la información. Así mismo permite evaluar la fuente de donde se saca la información.

5.2. Instrumentos de recolección de datos

Se utilizaron los siguientes:

5.2.1. El cuestionario

Permitió la recolección de datos formulados por medio de un interrogatorio que puede presentarse a través de un documento presencial o virtual a los que serán interrogados.

5.2.2. La Ficha o Guía de entrevista

Para Ñaupas (2013), manifiesta que es una de las herramientas que se complementan con otra técnica que es la entrevista, porque esta tiene el tema con sus respectivas preguntas dependiendo del investigador hacia el entrevistado.

Se aplicó a magistrados, fiscales, jueces y abogados, ya precisados con anterioridad.

5.2.3. La lectura

Serán sujeto de análisis de esta técnica, las sentencias.

5.2.4. Fichas

Para poder expresar una idea sobre las fichas tiene la forma de un rectángulo realizado en un papel, cartulina o algún medio digital, con los caracteres y proporciones que se brinda dentro del formato APA, para que el investigador pueda glosar la información recogida por los diferentes medios.

Estas tienen sus subdivisiones, en las que se encuentran:

Fichas bibliográficas: Estas pueden permitir el registro de datos bibliográficos que tengan cierta fuente informativa que pueden ser extraídas de fuentes primarias o secundarias, que generalmente suelen ser libros físicos u online.

Ficha de Resumen: A través del resumen se simplifica la información que fue recolectada para mayor entendimiento del tema a tratar.

Ficha Textual: Se basa en duplicar tal cual un contenido encontrado en algún libro o investigación donde se cita al autor.

Ficha de Comentario: Esta ficha, es el análisis de la ficha textual, bajo la interpretación ya sea conforme o en discrepancia con el autor al cual se está refiriendo.

6. Procesamiento y análisis de datos

La forma cómo se procesar la información recolectada, tiene un propósito específico que ayuda a un propósito específico, que es cumplir con los objetivos planteados con anterioridad.

Recordando que es importante que en este proyecto exista la participación de los integrantes de la unidad de estudio, para ser específicos, son los jueces, fiscales, abogados. Por lo que, con la investigación realizada será conveniente poder aplicarles un cuestionario que tenga diez interrogantes. Se empleó el paquete estadístico Megastat versión.24

CAPITULO III

RESULTADOS

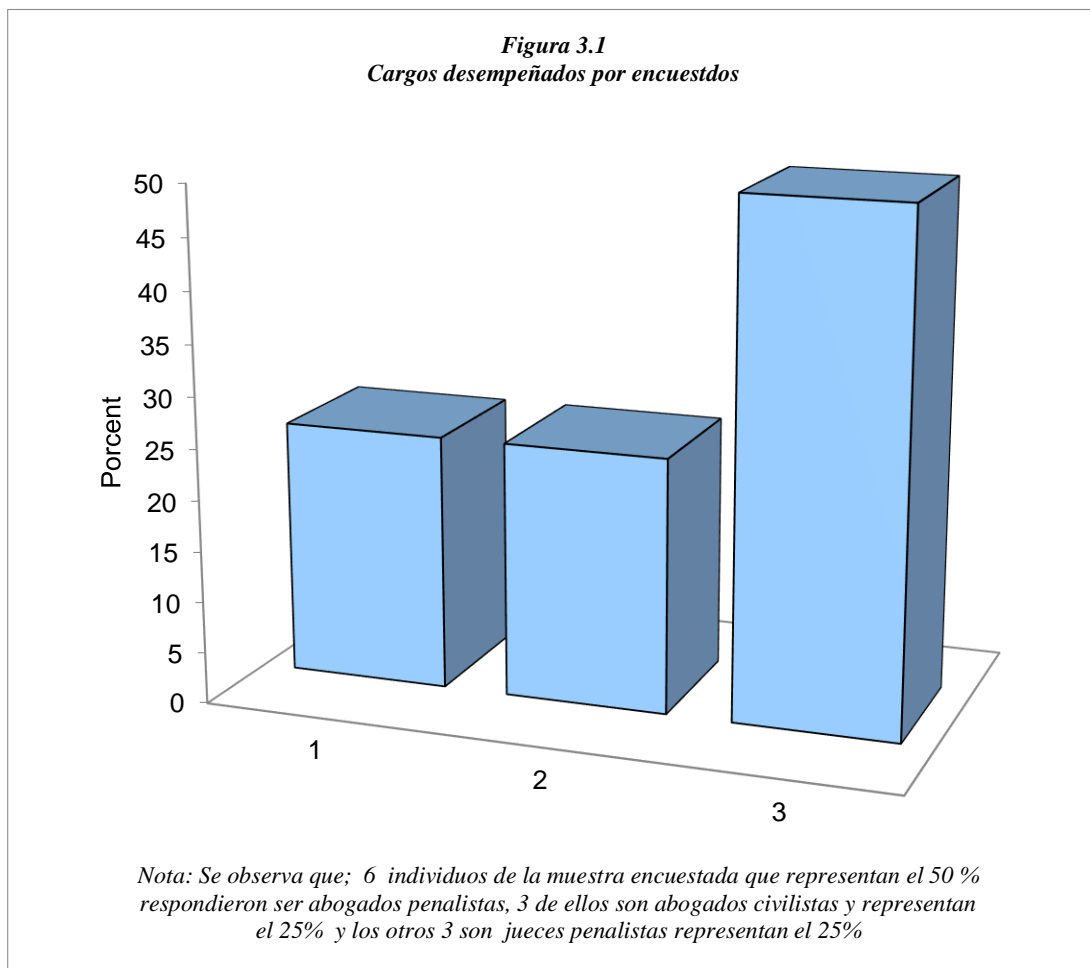
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.

3.1.1. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.1. Cargos desempeñados por encuestados

<i>Cargos desempeñados por encuestados</i>	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	3	25.0
2	3	25.0
3	6	50.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas
Fecha: setiembre 2021



Fuente: Tabla 1

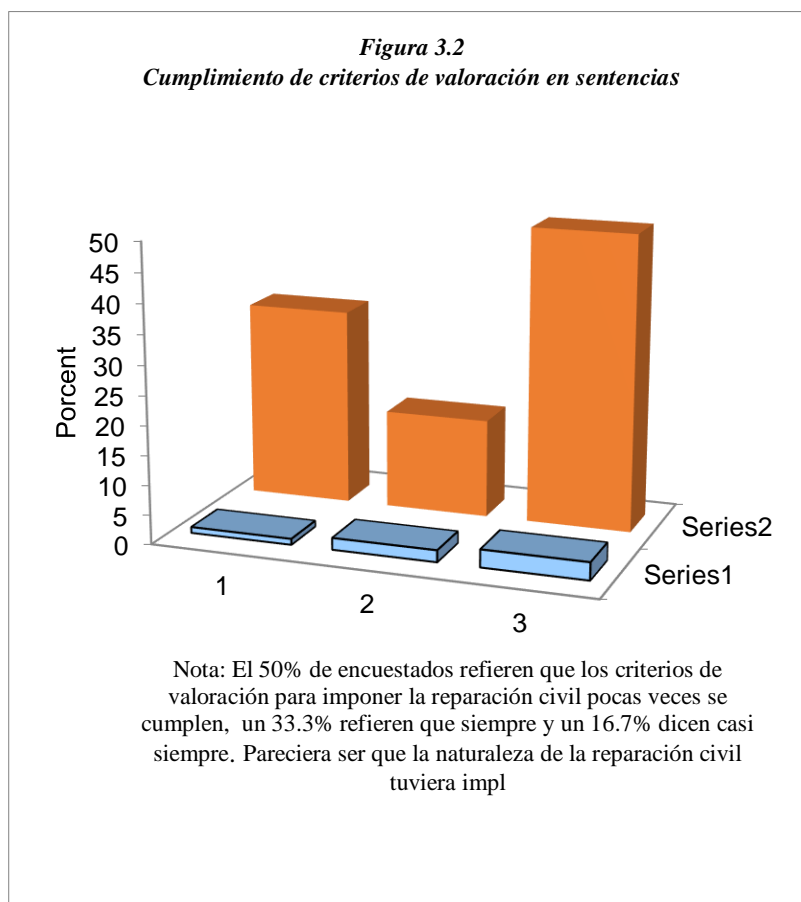
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.

3.1.2. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.2. Cumplimiento de criterios de valoración en sentencias

<i>Cumplimiento de criterios de valoración en sentencias</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	4	33.3
2	2	16.7
3	6	50.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas
Fecha: setiembre 2021



Fuente: Tabla 2

3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.

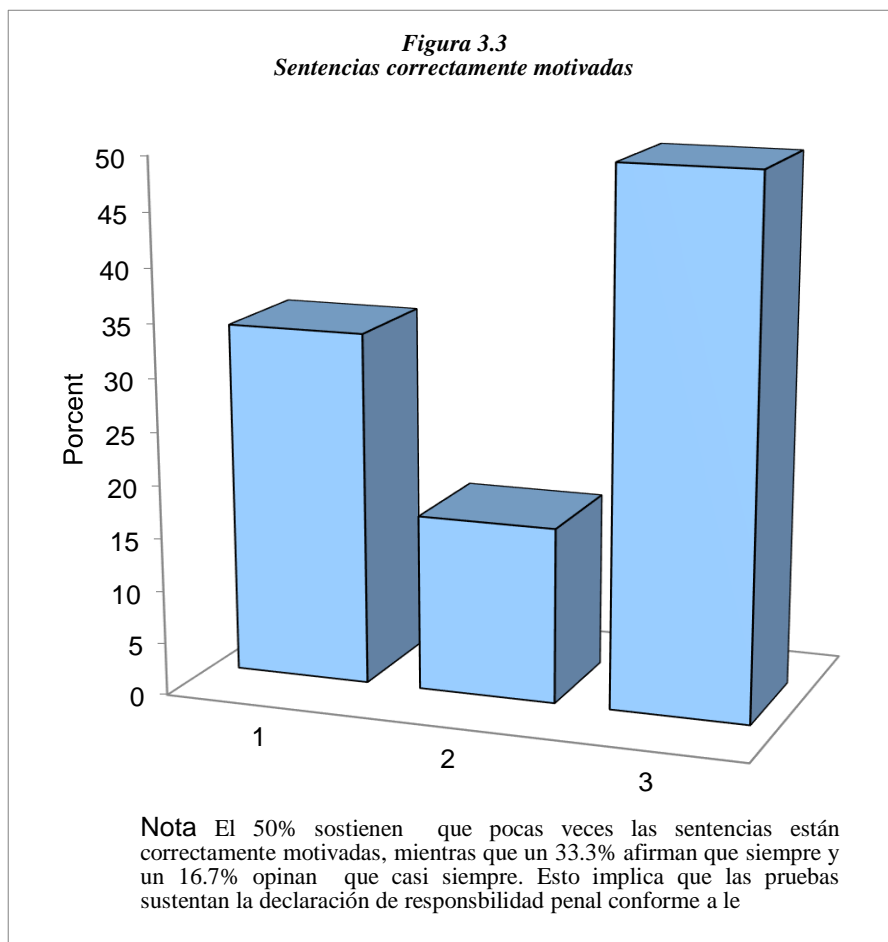
3.1.3. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.3. Sentencias correctamente motivadas

<i>Sentencias Correctamente motivadas</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	4	33.3
2	2	16.7
3	6	50.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas

Fecha: septiembre 2021



Fuente: Tabla 3

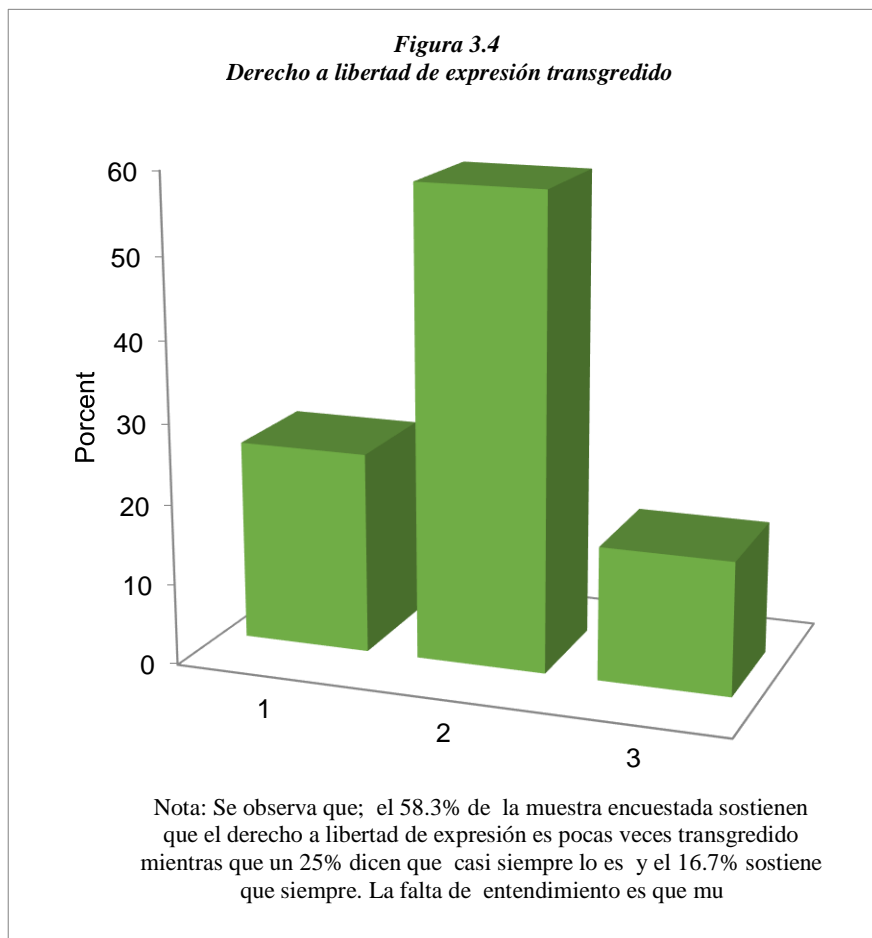
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.

3.1.4. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.4. Derecho a la libertad de expresión transgredido

<i>Derecho a la libertad de expresión transgredido</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	3	25.0
2	7	58.3
3	2	16.7
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas **Fecha:** setiembre 2021



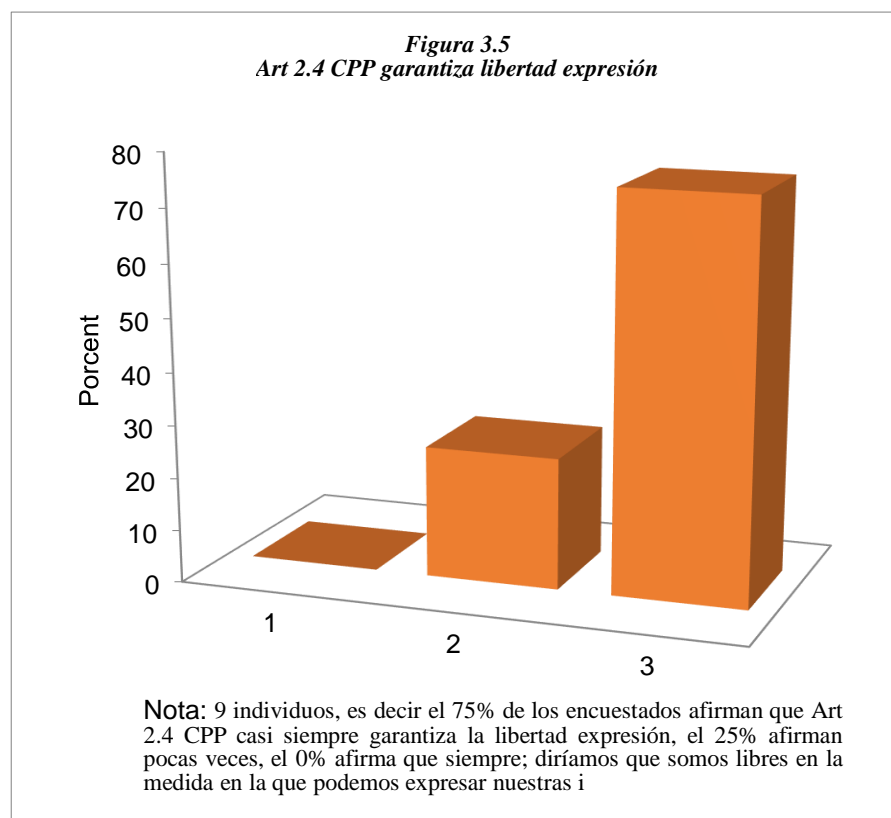
Fuente: Tabla 4

3.1.5. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.5. Art 2.4 de la Constitución Política del Perú garantiza la libertad de expresión

<i>Art 2.4 d la CPP garantiza la libertad de expresión</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	0	0.0
2	3	25.0
3	9	75.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas
Fecha: setiembre 2021



Fuente: Tabla 5

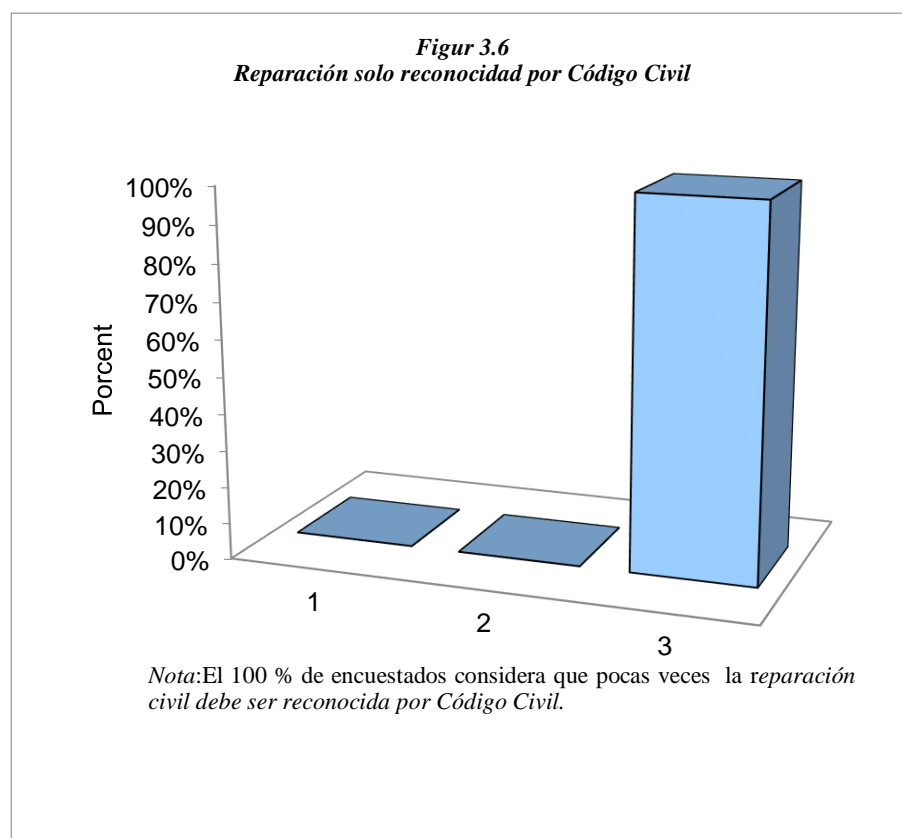
3.1. Análisis e Interpretación de Resultados.

3.1.6. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.6. Reparación Civil solo reconocida por el Código Civil

<i>Reponsabilidad Civil solo reconocidad por CC.</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	0	0.0
2	0	0.0
3	12	100.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas
Fecha: setiembre 2021



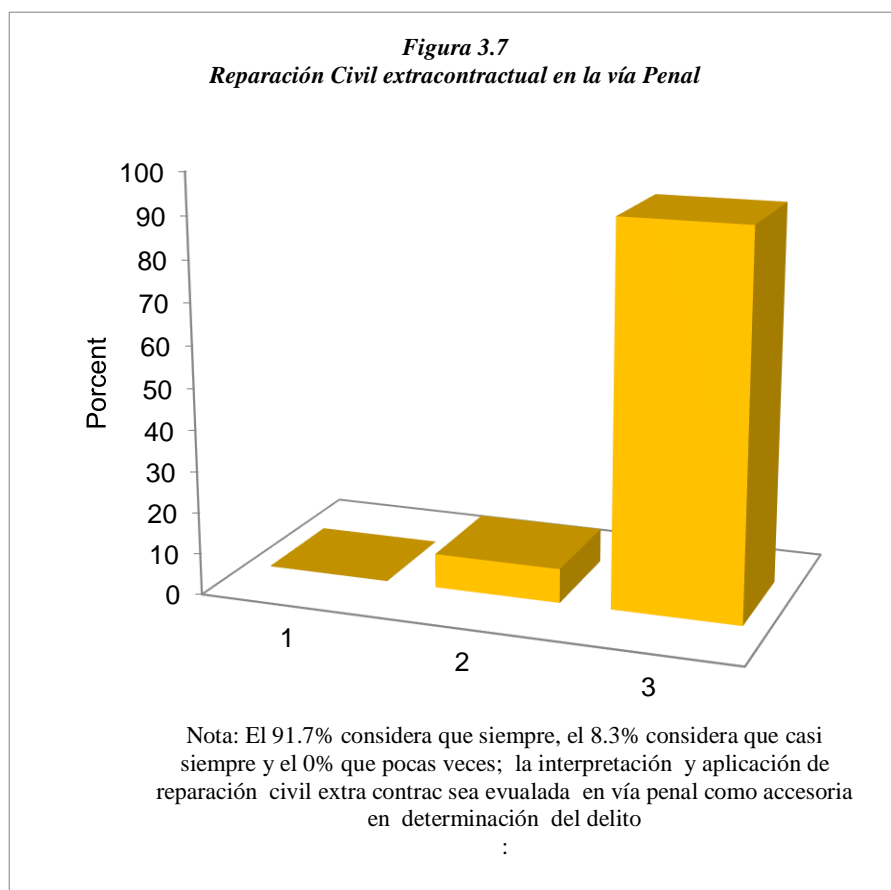
Fuente: Tabla 6

3.1.7. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.7. Reparación Civil extracontractual en la vía Penal

<i>Reparación Civil extracontractual en la vía penal</i>					
<i>frequency percentage</i>					
1	0	0.0	2	1	8.3
3		11			91.7
		12	100.0		

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas **Fecha:** setiembre 2021



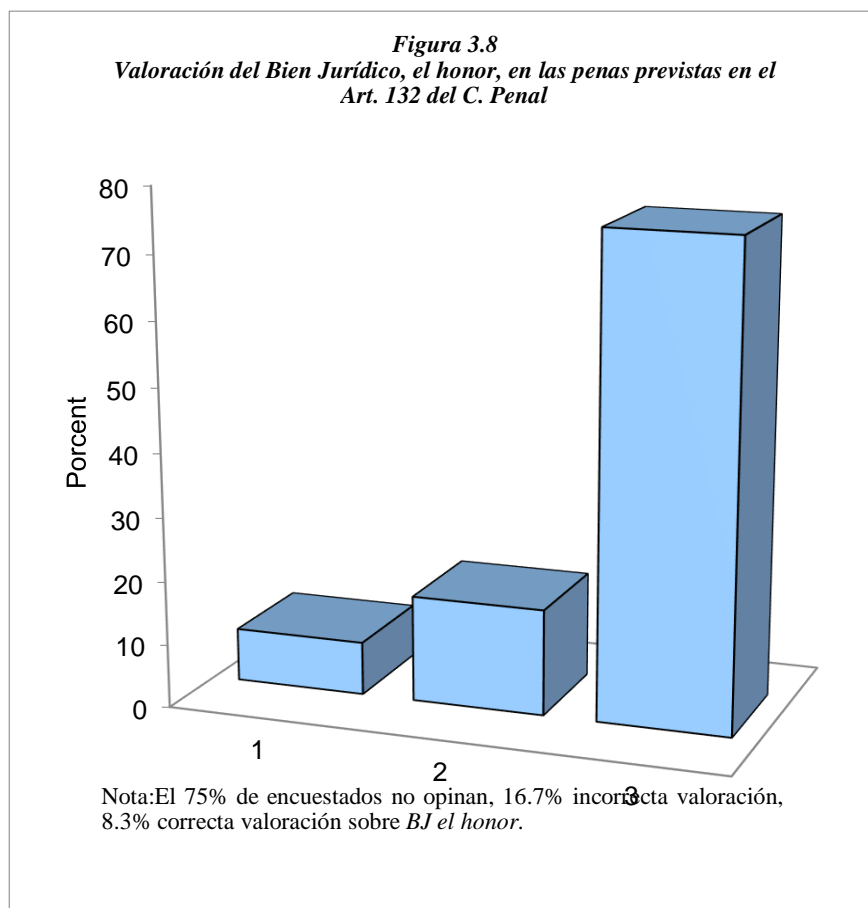
Fuente: Tabla 7

3.1.8. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.8. Valoración del Bien Jurídico, el honor, en las penas previstas en el Art. 132 del C. Penal

<i>Valoración Bien Jurídico</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	1	8.3
2	2	16.7
3	9	75.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas
Fecha: setiembre 2021



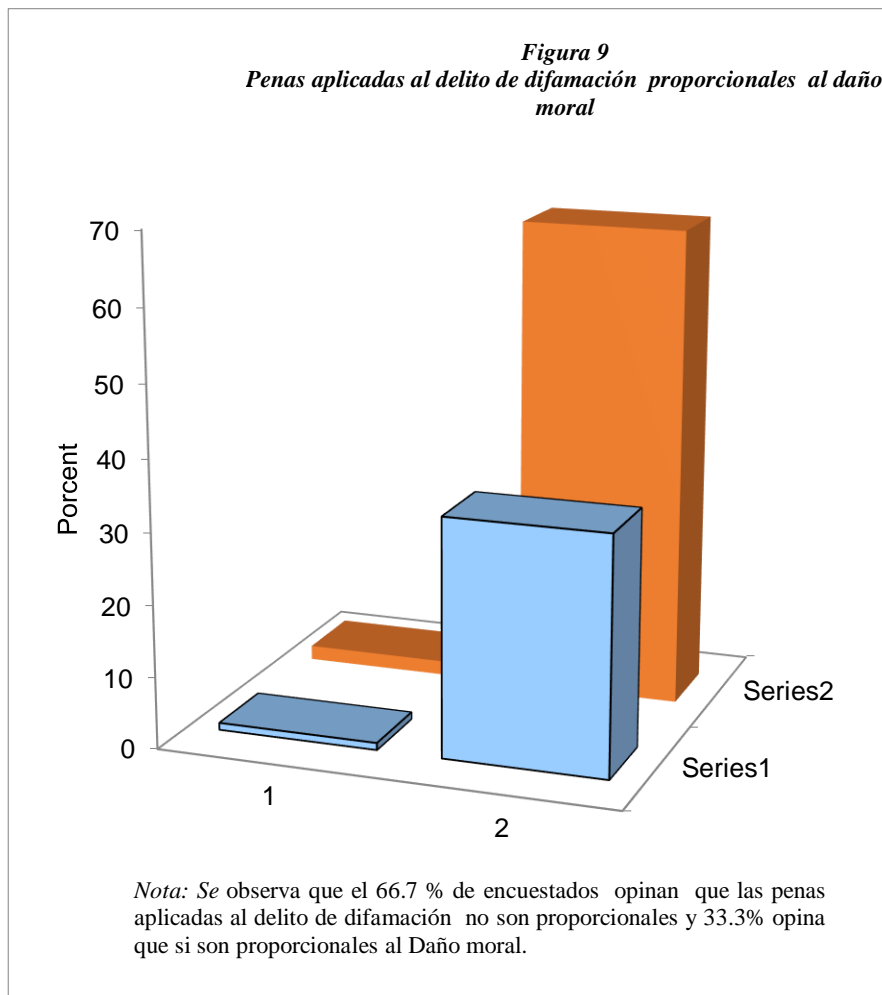
Fuente: Tabla 8

3.1.9. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.9. Penas aplicadas al delito de difamación proporcionales al daño moral

<i>Penas aplicadas al delito de difamación proporcionales al daño moral</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	4	33.3
2	8	66.7
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas
Fecha: setiembre 2021



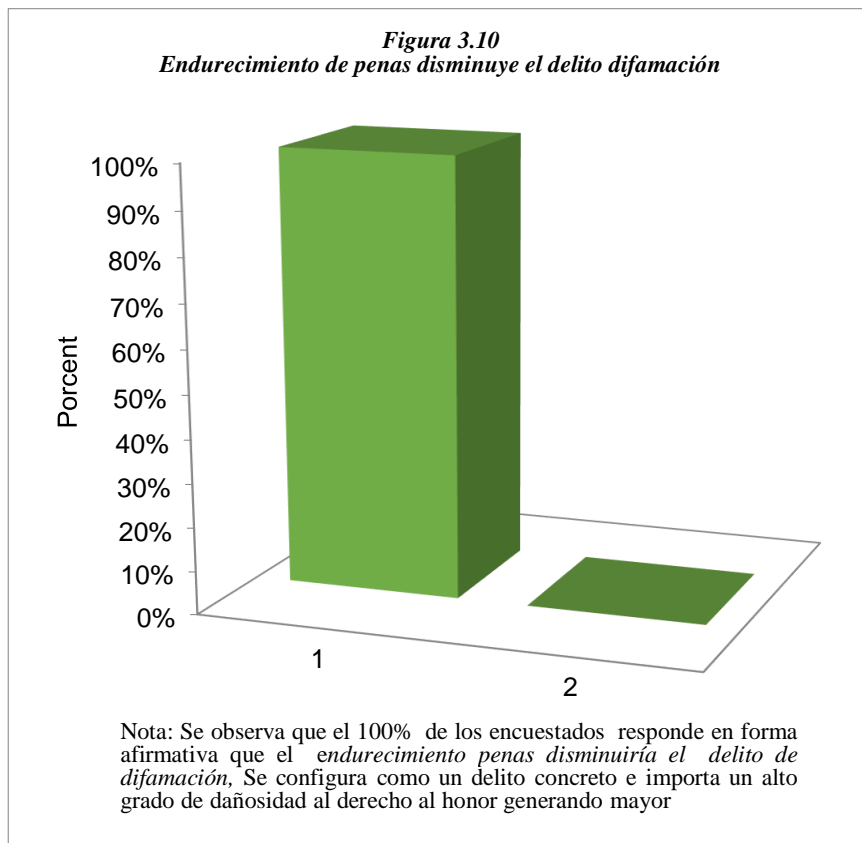
Fuente: Tabla 9

3.1.10. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.10. Endurecimiento de penas disminuye el delito de difamación

<i>Endurecimiento de penas disminuye el delito de difamación</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	12	100.0
2	0	0.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas Fecha: setiembre 2021



Fuente: Tabla 10

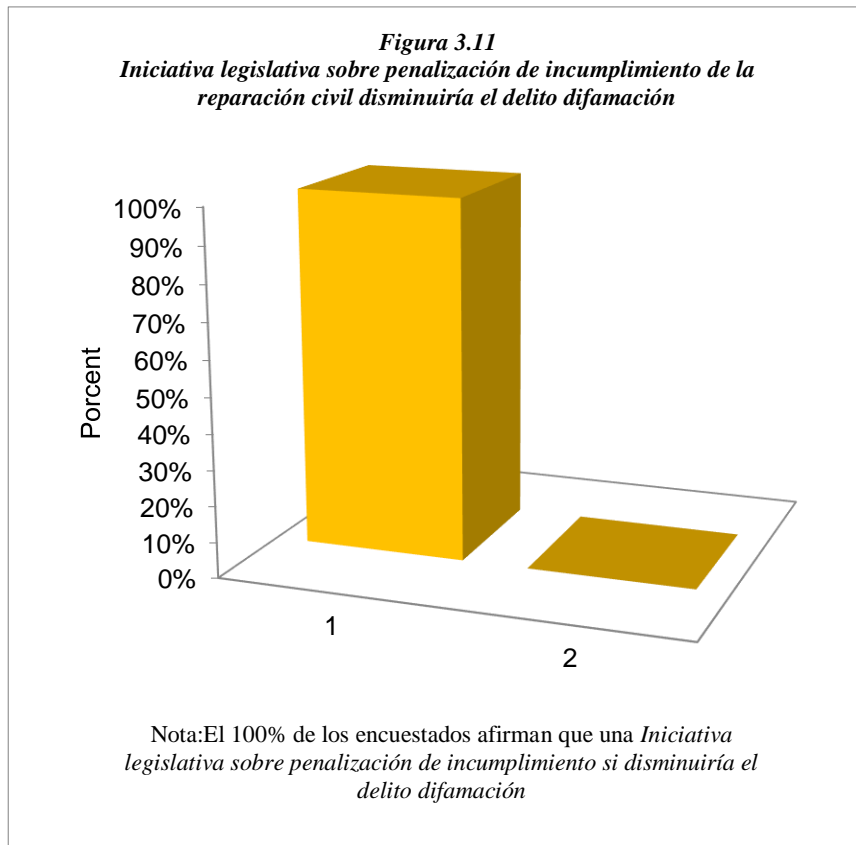
3.1.11. Análisis de datos obtenidos mediante instrumentos

Tabla 3.11. Iniciativa legislativa sobre penalización de incumplimiento de la reparación civil disminuiría el delito de difamación.

<i>Iniciativa legislativa sobre penalización de incumplimiento de la R.C. disminuye delito</i>		
	<i>frequency</i>	<i>percentage</i>
1	12	100.0
2	0	0.0
	12	100.0

Fuente: Cuestionario aplicado a Jueces, abogados civilistas y abogados penalistas

Fecha: setiembre 2021



Fuente: Tabla 11

3.1.12. Sentencia analizada

Se seleccionó el Exp 22/2008 de Paolo Guerrero contra Magaly Medina, por ser de relevancia mediática

Sentencia	Análisis y motivación de la sentencia
Exp: 22/2008 Delito: Contra el honor. difamación Querellados: Magaly Medina y otros Querellante: José Paolo Guerrero Gonzáles Juzgado: Juzgado 27° JP/CSJ-L Fecha: 16-9-2008	<p>Debo comentar que es poco común que los querellados por delitos contra el honor sean sentenciados a penas privativas de la libertad. Lo criticable es que la condena impuesta estuvo bajo el mínimo legal, el delito de difamación contempla de 1 a tres años de pena y a la señora le aplicaron únicamente cinco (5) meses, sin que haya y sin mencionar en la sentencia, atenuante o fundamento alguno, no obstante, reconocemos que es atribución, potestad del Juez para adjudicar la pena imponiéndolo por debajo del mínimo legal. Por tal motivo se suspendió la pena a cambio del período de prueba por un año y se subió el monto de la reparación civil de ochenta mil soles a cien mil soles. Como regla de conducta ordenaron rectificarse públicamente en forma y tiempo en que se difamara el honor del señor Paolo Guerrero, estas reglas no implican prisión, están reservados a delitos de menor riesgo para la sociedad con culpa y punibilidad, también parecería un exceso aun habiendo lesión al bien jurídico. La reparación solicitada se acompañó de una multa fijada, lo que no parece adecuado en palabras de penalistas como Oré (s/f) quien sostiene que ésta no repara el daño causado, es una sanción pecuniaria con la que el condenado está obligado a "pagar al Estado una cantidad fija dentro de los días de la sentencia". (art. 41° CP) porque dará lugar a una dispensa cuando se aplique la pena de prisión efectiva (en cuyo caso no se ha establecido un código de conducta) o cuando se levante la suspensión de su ejecución.</p> <p>Criterios de valoración cumplidos para reparación civil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Daño al honor y menoscabo a la dignidad 2 Anti juricidad, ilicitud 3 Imputabilidad: culpa y dolo 4 Relación de causalidad entre el daño y el acto ilícito 5 Difusión de noticias dolosas 6 Vulneración de imagen y reputación profesional

Fuente: Juzgado 27° JP/CSJ-
Fecha: 16-9-2008

3.1.13 De la entrevista

Las respuestas más significativas son:

- a. Los criterios mayormente utilizados son: Daño al honor y reputación, circunstancia agravante por medio de redes sociales, prensa escrita, televisiva, considerando su carácter reparador, la gravedad de lo sucedido y el sufrimiento que ha sucumbido a la víctima, la aplicación del principio de proporcionalidad, equidad, al mismo tiempo se menciona que no se puede solicitar reparación o multas pecuniarias fuera del alcance económico financiero de quien está obligado a reparar o indemnizar. Así mismo el rango de lesividad y su intenso perjuicio del bien que ha sido lesionado. Muchos de estos criterios no se toman en cuenta para evaluar el bien jurídico lastimado como la participación especialistas psicólogos o psiquiatras medir la intensidad del daño moral.
- b. Las sentencias emitidas en los Juzgados Penales que determinan la reparación civil en su mayoría están pocas veces son correctamente motivadas pues colisionan con la desproporcionalidad en la cuantía indemnizatoria.
- c. Con respecto a la naturaleza de la reparación civil, en este ítem, los entrevistados refieren en la tesis de la responsabilidad civil por daños pocas veces es una obligación civil.

En concordancia con Osterling (2003) y con San Martín, (2003) que creen que no sólo no se deriva de un delito como el daño del que finalmente se condena al perpetrador, sino que ni siquiera se deriva de un delito.

El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, consideran una organización delictiva no solo porque tiene sus raíces en la comisión de un acto ilícito, sino también porque el acto ilícito en sí mismo causa daño al afectar o poner en peligro el bien jurídico protegido.

Según el artículo 101 tipificado en nuestra legislación penal peruana, indica que la reparación civil se rige además por disposiciones pertinentes del código civil.

Es decir, no es el consenso sobre la ruta necesaria para su tratamiento.

3.2 Propuesta

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 132º DEL CÓDIGO PENAL SOBRE DIFAMACIÓN

El ejercicio del derecho de iniciativa legislativa está previsto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Estatuto.

FÓRMULA LEGAL

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL SOBRE DIFAMACIÓN

Artículo Único. Objeto de la Ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Muchas personas sin título profesional que ejercen difusión de noticias, generalmente relacionadas con el espectáculo a través de redes o de una pantalla de televisión tienen la idea que el término libertad de expresión significa libertad para denigrar o manchar el honor de otras personas pudiendo llegar a cometer el delito de difamación normado en el art 132 del C.P., las cuales han ido incrementando debido a la interacción de los usuarios en las plataformas virtuales.

Se observa que, en cuanto a la reparación civil dentro del proceso penal existen problemas con las resoluciones judiciales condenatorias por el delito mencionado; ya que éstas con cierta frecuencia no son cumplidas, pareciera que la falta de claridad en su naturaleza jurídica es el inconveniente principal, puesto

que connotados doctrinarios dogmáticos y juristas no se han puesto de acuerdo debiendo uniformizar algunos criterios.

De hecho, el TC y el Poder Judicial han emitido opiniones contrarias sobre el asunto, el primero alegando que no se trata de una orden civil (STC Exp.00695-2006-PHCITC; 395-2004-HC/TC) por constituir la "condición real para la ejecución de sentencias", el poder Judicial, mediante leyes y acuerdos plenarios, afirma que la reparación civil tiene una estricta en lo civil A.p.N° 5/99 del 20 de noviembre de 1999, en su tercer considerando señala: Con respecto a los Derechos Judiciales, la restitución tiene un sentido civil único "y que su tratamiento en el proceso penal se fundamenta fundamentalmente en fundamentos económicos procesales".

Casos emblemáticos, mediáticos:

Según Pérez y Gardey (2021), sostiene que el término mediático es aquello perteneciente o relativo a los medios de comunicación; es decir éste término es muy frecuente para nombrar a ciertos personajes que alcanzan la popularidad en los medios de comunicación por sus escándalos y polémicas como es el caso de Magaly Medina.

En la presente investigación he considerado los casos de difamación de Magaly Medina (querellada), pues es quien ejerce el periodismo sin título profesional.

Los casos considerados fueron:

Exp: 22/2008, delito: Contra el honor, difamación, querellados: Magaly Medina y otros querellantes: José Paolo Guerrero Gonzáles. Juzgado 27° JP/CSJ-L, con fecha: 16-9-2008

La querellada afrontó un proceso por el delito de difamación contra el jugador Paolo Guerrero, el caso fue mediático a nivel nacional, se pudo observar que en la primera instancia se estableció una pena de cinco meses de prisión, en cuanto a la segunda instancia, esa pena aumentó a dos años; y en el caso de la reparación quedó con la suma aproximada de cien mil nuevos soles. Además,

que se le exigió que cumpla la pena pecuniaria en conformidad de doscientos días multa; así mismo se le solicitó a la periodista como parte de su conducta, que sea rectificado públicamente lo dicho hacia el jugador, con el mismo método y el mismo número de veces que se transmitió dicha noticia difamatoria. El fallo, se cumplió con el ingreso al penal de mujeres de Chorrillos.

Así mismo, la misma señora Medina afrontó proceso judicial iniciada por el querellante señor Jean Pierre Vismara, modelo masculino, culminando dicho proceso con prisión suspendida y el pago de la reparación civil, por dicho delito de difamación.

Otra querella por el mismo delito, que tiene la conductora Medina, es en agravio de Nicola Emilio, Porcella Solimano, el Juez de la causa impuso una condena de un año de “pena privativa de libertad suspendida” por el lapso de un año y una pena pecuniaria de ciento veinte días multa y el pago de veinticinco mil nuevos soles por reparación.

II PROPUESTA DE SOLUCIÓN Artículo

132° Difamación

El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días – multa.

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días – multa.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días – multa.

Si el condenado incumple con el pago de la reparación civil, aun cuando no se le imponga como norma de conducta, se le revocará la pena a efectiva.

III. ACTORES INVOLUCRADOS

Agraviados

Agentes pasivos quienes tendrán mejor protección con la norma a dictar en caso de que no se cumpla dicha reparación civil.

Difamadores

Agentes activos que cometen la acción típica del delito de difamación mediante cualquier medio de comunicación social, quienes tendrán que pagar reparación por daño moral y de no hacerlo se le revocará la pena a efectiva, aun cuando no se le haya impuesto como norma de conducta

IV. ALCANCES DE LA PROPUESTA

La presente iniciativa busca que la pena se revoque a efectiva cuando el condenado incumple con el pago de la reparación civil, ***aun cuando no se le haya impuesto como norma de conducta***, por el delito de difamación previsto en el artículo 132º del Código Penal.

V. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Cuando esta ley entre en vigor, se modificará el artículo 132º del Código Penal, revocando a efectiva y con la pena, máxima por incumplimiento de reparación civil.

VI. ANÁLISIS BENEFICIO

El presente texto no irrogará al Estado gasto alguno.

VII. MARCO LEGAL

5.1 A nivel de Constitución Política del Perú

Artículo 2: numeral 1, 4, 7 y 24.

Artículo 200

5.2. A nivel de Leyes

Código Penal: artículo 132°, 134°

CAPITULO IV

DISCUSIÓN

Presentados, analizados e interpretados en tablas de información recopiladas a través de diversas técnicas y herramientas, se han obtenido los resultados globales del trabajo de investigación actual, en base a los objetivos, el contexto de investigación y la teoría específicamente definidos. **A. En cuanto a los objetivos investigados:**

a. Sobre los criterios de evaluación utilizados en la aplicación para la reparación Civil en las decisiones por difamación del Juzgado de lo Penal, el 50% de encuestados refieren que a pocas se cumplen, un 33 % refieren que siempre y un 16% sostienen que casi siempre. Este alto porcentaje del 50% de pocas veces, reflejan lo que la comunidad jurídica expresa: Los criterios mencionados son muy pocas veces tomados en cuenta, probablemente debido a la naturaleza jurídica y su dificultad para determinarlas puesto que connotados juristas, teóricos, tampoco dogmáticos han podido ponerse de acuerdo.

La respuesta a la interrogante N° 6 de igual manera, un alto porcentaje 100% considera que la naturaleza de la reparación civil pocas veces debe ser reconocida únicamente por el Código civil, es por ello que el Poder Judicial en su jurisprudencia y acuerdos plenarios lo considera en el proceso penal, solo por razones procesales económicas.

De las entrevistas realizadas a magistrados, abogados civilistas y abogados penalistas se ha obtenido información valiosa y afirman de acuerdo a su experiencia, los criterios de valoración mayormente utilizados son:

Daño al honor y reputación mediante prensa escrita, televisiva, redes sociales, gravedad del daño moral, sufrimiento de la víctima, aplicación de principio de proporcionalidad, bien jurídico lesionado, participación de especialistas como psicólogos o psiquiatras.

b. En cuanto al segundo objetivo investigado, el 50% de individuos sostienen que las sentencias pocas veces están correctamente motivadas para determinar la reparación civil, esto significa que el juez pocas veces valora con criterio racional, juicioso de manera correcta las pruebas presentadas por el

querellante para dictaminar el fallo decisorio de la sentencia a vista. Por otro lado, los encuestados afirman que del análisis efectuado a las resoluciones analizadas por sus despachos un 33% casi siempre están motivadas mientras un escaso porcentaje de 16% opinan que siempre lo están.

Este alto porcentaje de pocas veces, es preocupante puesto que sería uno de las tantas incertidumbres o problemas que se derivan de la reparación civil no pagadas oportunamente por el sentenciado.

Cabe señalar que la base de las sentencias es un aspecto fundamental de la composición judicial de acuerdo con las disposiciones contenidas en todas las normas legales. Y estos se basan en la necesidad de explicar explícitamente a la jurisprudencia que la solución del caso es el resultado de una interpretación secuencial, y no el resultado de una arbitrariedad.

c. En cuanto al tercer objetivo investigado se elaboró la iniciativa legislativa mencionada conteniendo la propuesta. (Ver infra).

B. En cuanto a los antecedentes de estudio

Se coincide con el trabajo de Venero (2020) quien llega a la conclusión que las disposiciones penales compatibles con el estado de derecho, destinadas a garantizar una mínima injerencia en las libertades de las personas. Por tanto, el derecho penal debe proteger únicamente los intereses legítimos y morales o la pureza del régimen estatal. Asimismo, se podrá excluir de la relevancia jurídica penal los actos que no puedan vulnerar derechos legales. Por tanto, querer excluir la responsabilidad del comunicador social bajo el fundamento del derecho a la libertad de poder expresarse o brindar información, sería la excusa perfecta para evitar la sanción en el delito contra el honor (difamación) y su reparación civil.

C. En cuanto a la teoría estudiada:

También es consistente con la Teoría Fundamental de los Derechos Humanos porque el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental implica que los Estados tienen dos obligaciones específicas: *la obligación de respetar*, es decir que el Estado está obligado a no realizar actos en contra de la libertad de expresión y *garantizar este derecho*, es decir que se deben tomar todas las medidas para los individuos puedan hacer uso de su libertad de expresión.

Según nuestra legislación penal indica que, la Difamación agravada se encuentra tipificada en el Art 132, tercer párrafo del C; es decir si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres.

Según nuestra carta magna, art 2, inciso 4 sostiene que, las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación.

CONCLUSIONES

Se redactan en concordancia con el objetivo general y los objetivos específicos

A. Con el objetivo general

La iniciativa legislativa modificatoria del artículo 132° del Código Penal para penalizar el incumplimiento de la Reparación Civil a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación, se presenta a un grupo de parlamentarios lambayecanos para que sea elevada a las instancias correspondientes. Esta propuesta contempla ***revocar la pena a efectiva cuando se incumpla con el pago de la reparación civil aun cuando no se haya impuesto como norma de conducta.***

Motivo por el cual se propone adicionar el texto por incumplimiento de la reparación civil se revocará la pena a efectiva, aun cuando la reparación civil no se haya impuesto como norma de conducta.

B. Con los objetivos específicos

- a. Los criterios de valoración utilizados para aplicar la reparación civil en los Juzgados Penales son generalmente los mencionados por la doctrina tales como: El daño causado, el grado de lesión y la intensidad al bien lesionado, la necesidad de reparar y el resarcimiento de los daños causados de forma antijurídica, y el nexo causal.

Según Osterling (2003), precisa que la base de la responsabilidad se basa en el código de ética según el cual nadie tiene derecho a causar daño a otros. Si una persona viola esta regla, está obligada a reparar el daño causado, incluso si resulta de una violación de una obligación anterior.

- b. Con respecto al segundo objetivo específico debo decir que, la garantía de las motivaciones judiciales han sido fruto de un largo proceso histórico realizado en sedes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales. Estas razones no requieren un juicio completo y detallado de todos los aspectos y opiniones que las partes puedan tener con respecto a la conducta

dolosa, pero tales decisiones arbitrales están bien fundadas y basadas en criterios legales válidos deben considerarse razonadas.

En el contenido, las resoluciones analizadas fueron efectivamente promovidas por una mayoría de según parámetros normativos, doctrinales y legales.

Los resultados muestran que la calidad del título, el porcentaje de interés y la decisión son positivos.

Para Couture (2002), muestra que esta motivación funciona como una teoría silábica, no asume una actitud exacta (parecido a un ejercicio matemático), debe partir de las reglas del sentido común, como una actividad compulsiva, siempre errónea, frecuentemente deficiente, no exhaustiva en una teoría silábica, ni en una simple operación inductiva deductiva.

El análisis de los hechos y actos ilícitos denunciados y analizados en las sentencias deben apoyarse en resultados de pruebas psicológicas de peritos profesionales, ya que son máximas de experiencia. Estas reglas requieren conocimientos técnicos, por lo que es necesario convocar el concurso y participación de peritos psicólogos o psiquiatras para que el Juez se apoye en la decisión a tomar.

Se debe mencionar que, para tramitar esta responsabilidad civil derivada del delito, la jurisdicción penal, debe aplicar las disposiciones sobre la responsabilidad civil del Código Penal y subsidiariamente las del Código Civil – Art. 101 del C. P.

Asimismo, según el artículo 1984, indica que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia.

Cabe mencionar que, las sentencias deben ser motivadas, precisas, escuetas, concisas y jurídicamente fundada; es decir deben guardar relación, deben ser proporcionales y congruentes, teniendo en cuenta la valoración de la prueba.

C. Se elaboró una propuesta de iniciativa legislativa, para modificar el artículo 132 de la legislación Penal.

Recomendaciones

Se recomienda:

1. Aceptar la propuesta consistente en una iniciativa legislativa modificatoria del artículo 132° del Código Penal para penalizar el incumplimiento de la Reparación Civil a los comunicadores sociales que ejercen el periodismo sin título profesional en el delito de difamación, la iniciativa contempla ***revocar la pena a efectiva cuando incumpla con el pago de la reparación civil aun cuando no se haya impuesto como norma de conducta.***

2. Aplicar los criterios de evaluación en la aplicación de la indemnización civil en las resoluciones dictadas por difamación, considerando para cada caso concreto de difamación los principios fundamentales del derecho penal como la fragmentación.

3. Motivar adecuadamente las sentencias para determinar la reparación civil, esto significa que el juez debe valorar con criterio racional, juicioso de manera correcta las sentencias, la racionalidad de sus decisiones es muy importante, pues allí reside su principal fuente de legitimidad constituyéndose en una garantía frente a la arbitrariedad y; en mérito a su principal función que es facilitar el control público de la decisión, puesto que sería un error pensar que la decisión judicial tiene únicamente una dimensión privada, la sentencia es también un acto público o colectivo. Debemos recordar que la motivación persigue explicar de manera suficiente el proceso intelectual conducente a dictar sentencia.

El motivo, en una visión amplia, es la obligación de cada juez de presentar las razones y argumentos que conducen o conducen a la decisión de adjudicación, dado el contexto fáctico y los fundamentos legales que sustentan la decisión.

Referencias

- Achauanco, G.M. (2018) *Proporcionalidad de la Reparación Civil y el Bien Jurídico Afectado en los Juzgados Penales de Cusco*. Tesis de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal.
- Agencia (EFE,25 de mayo del 2021) *El Presidente Argentino denunciará a opositora política por difamación*.
<https://www.efe.com/efe/america/politica/el-presidente-argentino-denunciara-apolitica-opositora-por-difamacion/20000035-4544748>
- Alarcón, G. (2020)** *Interés público y despenalización de los delitos contra el honor cometidos a través de la prensa. Una evaluación de la experiencia peruana*. Polít. Crim. Vol. 15, N° 30 (Diciembre 2020), Art. 16, pp. 1009 - 1051
 [http://politicrim.com/wp-content/uploads/2020/12/Vol15N30A16.pdf]
- Alexy, R. (1993). *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
- Alvarado,J. (2017) *Código Penal*, Lima: Grijley
- Álvarez, I, J. et al (2017)** *Libertad de expresión a 30 años de la opinión consultiva sobre colegiación obligatoria de periodistas. Libertad de expresión, Sanciones y Sistema Interamericano. Organización de los Estados Americanos.(OEA)*.
- Ávila, et al. (2011) *Libertad de expresión: debates, alcances y nueva agenda*. Quito.
www.flacsoandes.edu.ec.
- Barbieri, P.C. (2015) Breves apuntes sobre las funciones de la responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial.
<http://www.saij.gob.ar/pablo-carlos-barbieribreves-apuntes-sobre-funcionesresponsabilidad-civil-codigo-civil-comercialdacf150490-2015-09-07/123456789-0abc-defg>

- Carbonell, M.(2008) El principio de proporcionalidad y los Derechos Fundamentales. En Carbonell, (Ed) *El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional*. (pp.9 -10).
- (2000). Construir el pluralismo en Carbonell, M. y Carpizo,J. (Ed) *Derecho a la información y Derechos Humanos*. UNAM.
- Castán, J. (1968), *Derecho de Obligaciones*”, 10ª ed.,
- Casación N° 1070 –95 Arequipa. Publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 05 de julio de 1998, pág. 1389.
- Casación 4844-2013 Lambayeque.
- Casación Expediente N° 320-2002-Camaná, El Peruano, 01-09-2003, pág. 10807.
- Casación Expediente N.º 950-95. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria,
- Casación Expediente N°3220-2002-Camaná, 25 Abr, 2003. .
- Código Penal, (2017) Art 230.4.12 setiembre 1993. Lima: Grijley
- Coronado, L. (2015) *La libertad de expresión en el ciberespacio*, Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral
- Corte Suprema, Acuerdo Plenario número
- Comisión Interamericana de Derechos Humano, (CIDH,2011) *Derecho a la libertad de expresión*.
- Constitución Política del Perú (1993).. Lima, Perú: Congreso de la República.
- Corte Suprema de Justicia de la República (2006). *Acuerdo Plenario N°3-2006/CJ-116*. Lima: Corte Suprema de Justicia de la República.
- Convención Americana de Derechos Humanos (1969). San José, Costa Rica.
[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/82C8F9A4E32C68070525755F00830687/\\$FILE/05_ConvencionAmericana.pd](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/82C8F9A4E32C68070525755F00830687/$FILE/05_ConvencionAmericana.pd)
- Consejoprensaperuana.org.pe/opinion/informe-2021-i-de-libertad-de-expresion-en-elperu-para-la-sociedad-interamericana-de-prensa/
- Constitución Política del Perú (1993) *Derecho a la libertad de expresión* art 4º 2.

De Ángel Yaguez. (2008) *Tratado de responsabilidad civil*. Madrid:

Defensoría del Pueblo del Perú. *Situación de la libertad de expresión en el Perú*,
Setiembre de 1996 a Setiembre de 2000. Informe Defensorial N° 48.

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/informe_48.pdf

Enciclopedia jurídica (2020). <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/difamaci%C3%B3n/difamaci%C3%B3n.htm>

Espinoza, J. (2006) *Derecho de la Responsabilidad Civil*. Lima: Gaceta Jurídica.

(2007) *Derecho de la responsabilidad Civil*. 5° ed. Rodhas. Lima,

(2013) *Derecho de la responsabilidad civil*. 7° ed. Rodhas. Lima,

Forseti.pe/revista/derecho-civil-patrimonial/articulo/la-reparacion-civil-en-sede-penalla-
confusion-proveniente-de-su-concepcion-como-acce

Fontán, C. (1998). Derecho penal. *Introducción y Parte General*. Buenos Aires: Abeledo

Gálvez, T. A . (1999) *La Reparación Civil en el Proceso Penal*. IDEMSA, Lima. p. 69.

Gálvez, T.A. (2008) *Responsabilidad Civil Extracontractual y delito* presentada para
optar el grado de Doctor en Derecho Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de Postgrado,

Gobierno Regional de Lambayeque. (7 de febrero del 2019). *Gobernador denunciará a
ex jefe de OCI por Difamación Agravada*. Gobierno Regional de Lambayeque.

Recuperado de:

<https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/noticia/detalle/266>

Gonzáles, L.,R., (2012) La libertad en parte del pensamiento filosófico. *Cuestiones
Constitucionales* . UNAM.

<http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n27/n27a5.pdf>

Guerrero, L.F., (2017) *Fundamentos de la Dogmático jurídico penal*, México

Hernández, Fernández-Collado, C., y Baptista, M.P. (2010) *Metodología de Investigación
Científica*. Mc Graw-Hill.Co.

- Huerta Guerrero, L (2010). *Libertad de expresión: fundamentos y límites a su ejercicio*, en Pensamiento Constitucional, Año XIV, Lima, número 14.
- Human Rights Watch (abril 7, 2020) *Decreto supremo amenaza libertad de expresión*.
<https://www.hrw.org/es/news/2020/04/07/bolivia-decreto-sobre-covid-19amenaza-la-libertad-de-expresion>
- Ikehara, F. (2018) *La problemática de la responsabilidad civil en sede penal y los punitive damages*, a partir del Código Penal peruano de 1991 Tesis de Maestría en Derecho Penal PUCP.p.10-18
- Kleinstauber, H. (2002) *El surgimiento del ciberespacio: la palabra y la realidad* en Vidal, J. La ventana global. Madrid: Taurus
- Libertad de Prensa (26 abril 2021) Informe 2021-I de libertad de expresión en el Perú para la Sociedad Interamericana de Prensa Caso Pillco
- León Barandiarán, J. (1984) Responsabilidad Contractual, En Exposición de Motivos y Comentarios del Código Civil Peruano de 1984, Compiladora: Delia Revoredo de De Bakey, Tomo VI.
- Lozano, C.,A.(2018) *El daño moral en la sentencia penal condenatoria*. Tesis de Maestría para optar el grado de Maestro en Derecho Penal. UNFV.
- Martín Casals, M. (2003) El daño moral, Derecho Privado Europeo, Sergio Cámara (coord.), Editorial Colex, (p. 857).
- Núñez Martínez, M (2008). *El Tribunal Constitucional y las libertades del artículo 20º de la Constitución Española*, en Revistas de Derecho UNED, Madrid, n 3.
- Núñez, A. (2014) *Fundamentos del seguro de responsabilidad Civil en Perú*. Bogotá.
- Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa,E., y Villagómez,A. (2013) *Metodología de la Investigación Científica y Elaboración de tesis*.UNMSM. Lima.
- Oré, A. (2013) “*Manual Derecho Procesal Penal*” Tomo I, Editorial Reforma, Lima, Perú.
- Osterling, F. (1985) *Indemnización de daños y perjuicios*, en Homenaje a José León Barandiarán, Cultural: Cuzco,

- Osterling, F. y Castillo, M. (2003) *Tratado de las Obligaciones*, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte Tomo X, p. 240
- F. (2005) *Tratado de Obligaciones*. Lima: Gaceta Jurídica, , pág. 292
- Palacios, R. S. (2006) *Derechos Humanos, Proceso Penal y Reparación Civil*.
En: Responsabilidad Civil II. Hacia una unificación de criterios de cuantificación de los daños en materia civil, penal y laboral. Lima: Editorial Rodhas, p. 52.
- Palomino, J.A., Peña, J.D, Zevallos, G, y Orizano, L.A. (2015).*Metodología de la investigación*. Lima: San Marcos.
- Peña, F., A., (2010) *Naturaleza jurídica de la reparación civil ex delicto*. Gaceta Penal & Procesal Penal. No. 9, p. 74, 82:
- Picciuolo, Valls, J. (1999). *Dentro y fuera de la pantalla* (Apuntes para una Etnografía del Ciberespacio), en Antropología del ciberespacio (pp.16). Quito: Editorial Abya Yala.
- [Pino, R., \(2006\) *Metodología de la investigación*. Lima: San Marcos.](#)
- Pizarro, D (2002) *La reparación del daño patrimonial derivado de conductas antijurídicas lucrativas. situación actual*. Perspectiva. Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba
- Polemos (23 junio 2019) *El delito de difamación cometido a través de redes sociales: Una primera aproximación*.
- Poma,F. (2013). La reparación civil por daño moral en los delitos de peligro concreto. Revista Oficial del Poder Judicial pág. 95
- Real Academia Española,(2005) Diccionario de Lengua Española
- Recurso de Nulidad N° 1013-2017-Lima, del 01 de setiembre de 2017).
- Reyna, L., M. (2006) “Estudio final: la víctima en el sistema penal”. En: Reyna Alfaro, Luis Miguel (Coord.). *La víctima en el sistema penal. Dogmática, proceso y política criminal*. Lima: Ed Grijley, pág.147
- Roxin, C. (2009) *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito*. Madrid: Civitas ediciones.

- (2020) *La evolución de la política criminal, el derecho penal y el proceso penal*.
Valencia: Tirant lo Blanch.
- Prado, Saldarriaga, V. (2003) *Las consecuencias Jurídicas del Delito*. Gaceta Jurídica.
Lima
- Ruiz, J., I. (2012) *Metodología de la investigación Científica*. 5° Ed., Bilbao. Deusto
- Santos, J. (1977). *La responsabilidad civil: derecho sustantivo y derecho procesal*. 2a ed.
Madrid: Montecorvo, S.A.
- San Martín, C. (2003) *Derecho procesal Penal*. Tomo II Edit Grijley: Lima Serrano,
- A. (2003). *La brecha digital: mitos y realidades*. México: Editorial UABC
- Perú. Corte Suprema STC: Exp. N°: 0905-2001-AI/TC).
- Perú. Corte Suprema STC: Exp. 02465-2004-PA/TC. FJ: 16).
- Taboada, L. (2003). *Elementos de la responsabilidad civil (Segunda ed.)*. Lima: Grijley,
- Velarde, L., M., y Ikehara, F. () *La reparación civil en Sede Penal: La confusión
proveniente de su concepción como accesorio del delito*.
- Venero, H.H. (2020.) *Difamación cometidos a través de medios de comunicación social.
exclusión de la tipicidad de la conducta*.
- Villavicencio, F. (2013). *Derecho penal: Parte general (4ta. Ed.)*. Lima, Perú:
Grijley
- (2017) *Derecho Penal, Parte General*. Lima: Grijley
- Villegas, L., Marroquín, R., Del Castillo, V., y Sánchez, R., (2011) *Teoría y praxis de la
investigación científica*. Lima: San Marcos.
- Viollier, P. (2019) *Anuario de Derechos especializados*. V.15. *La tipificación de los
delitos de injuria y difamación y su efecto inhibitorio en el ejercicio a la libertad
de expresión en Chile*.
- Zaffaroni, E. (2002). *Derecho Penal: Parte. General*. Buenos Aires: Depalma

ANEXOS

Anexo 1

CUESTIONARIO Objetivo: Obtener información relacionado con la penalización del incumplimiento de la reparación civil en la libertad de expresión por el delito de difamación.

Instrucciones: Por favor marque con una “x” la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

I. Sociodemográfico

1. Ud desempeña el rol de:

A. Juez

B. Fiscal

C. abogado penalista

II. Interrogantes temáticas

2 ¿ Los criterios de valoración utilizados al momento de imponer la Reparación Civil en las sentencias emitidas por difamación en los Juzgados Penales son cumplidos ?

A. Siempre

B. Casi siempre

C. Pocas veces

3. ¿A su criterio, las sentencias judiciales emitidas en cuanto determinación de la Reparación civil en los Juzgados Penales son correctamente motivadas?

A. Siempre

B. Casi siempre

C. Pocas veces

4¿Considera Ud. Que el derecho a la libre expresión como Derecho fundamental ejercido por los comunicadores sociales es transgredido?

A.Siempre

B. Casi siempre

C. Pocas veces

5. ¿Considera Ud, que la aplicación del artículo 2.4 de nuestra Constitución de 1993 garantiza el Derecho Fundamental de la libre expresión?

A. Siempre

B. Casi siempre

C. Pocas veces

6 ¿Considera Ud, que la naturaleza de la reparación civil debe ser reconocida únicamente por el Código civil y no por otro instrumento legal?.

A. Siempre

B. Casi siempre

C. Pocas veces

7 ¿Considera Ud apropiado que la interpretación y aplicación de la responsabilidad civil extracontractual, sea evaluada en la vía penal como una cuestión accesoria a la determinación del delito?.

A. Siempre

B. Casi siempre

C. Pocas veces

8.¿Qué opinión le merece la valoración del bien jurídico, el honor, en las penas previstas en el art. 132° del CP delito de difamación?

A. Correcta valoración

B. Incorrecta valoración

C. No opina

9.¿Cree usted que las penas aplicadas al delito de difamación son proporcionales al bien jurídico honor, reputación, *daño moral* lesionado, que se pretende tutelar?

A. SI

B. NO

10.¿Cree usted que el endurecimiento en la aplicación de penas ayudaría a que los delitos de difamación disminuyan?

A. SI

B. NO

11 ¿Considera Ud que una iniciativa legislativa sobre penalización del incumplimiento de la reparación civil en el delito de difamación disminuiría el índice?

A. SI

B. NO

Gracias

Anexo 2

GUÍA DE ENTREVISTA**Entrevistado.....Cargo:.....Fecha.....**

Objetivo: Obtener información relacionado con la penalización del incumplimiento de la reparación civil en la libertad de expresión por el delito de difamación.

Instrucciones: Por favor responda con sinceridad las siguientes preguntas:

1. Según su experiencia mencione Ud algunos criterios de valoración que ha observado se cumplen al momento de imponer la reparación civil en sentencias emitidas en Juzgados penales.

Sentencia	Criterios de valoración cumplidos
Exp: Delito: Difamación Juzgado:	1
	2
	3
	4

- 2 Según su criterio por qué las sentencias emitidas en los Juzgados Penales que determinan la reparación civil están correctamente motivadas o fundamentadas?

Sentencia	Fundamentos de la reparación civil
Exp: Delito: Difamación Juzgado	1
	2
	3

- 3 ¿Qué opina con respecto a la naturaleza de la reparación civil?

- 4 ¿Qué opina con respecto a la fundamentación de resoluciones judiciales que determinan la reparación civil?.

Dr

Firma

Panel fotográfico



Entrevistando



ANEXO 01**CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS**

Yo, MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ, Docente/Asesor de tesis/Revisor del trabajo de investigación, del (los) estudiante(s)


GIULIANA PATRICIA COLINA PÉREZ

Titulada:

LA INCORPORACIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN VS EL EJERCICIO PERIODÍSTICO SIN TÍTULO PROFESIONAL, EN EL DELITO DE DIFAMACIÓN. luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 17% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 12 de Octubre del 2021


MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
DNI: 19222634
ASESOR

Se adjunta:

Resumen del Reporte (Con porcentaje y parámetros de configuración)

Recibo digital.





Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submission is displayed below.

Submission ID	Submission Title
07_10_informe_final_GULY.docx	07_10_informe_final_GULY.docx
File Name	07_10_informe_final_GULY.docx
File Size	1.4M
Page Count	106
Word Count	21,515
Character Count	118,080
Submission Date	08-Oct-2021 01:38PM (UTC-0500)
Submission ID	1668937893

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO

UNIVERSITY OF PUERTO RICO

TURNITIN

LA INFORMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO
CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SERVIDOR DE RECEPCIÓN
DE TURNITIN, SIN GARANTÍA DE SU VERACIDAD.

Copyright

© 2021 Turnitin, Inc. All rights reserved.

Turnitin

© 2021 Turnitin, Inc. All rights reserved.

Turnitin, Inc. All rights reserved.

07_-10_informe_final_GIULY.docx

Informe de Investigación

17%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

3%

PUBLICACIONES

8%

TRABAJOS DE
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS



repositorio.unfv.edu.pe

Fuente de Internet

2%



repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

1%



repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

1%



idoc.pub

Fuente de Internet

1%



repositorio.usmp.edu.pe

Fuente de Internet

1%



hdl.handle.net

Fuente de Internet

1%



Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

1%



documentop.com

Fuente de Internet

1%



repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

<1%


 MIGUEL ÁNGEL LUJÁN CORTEZ
 DNI: 18222634
 ASESOR